

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

78ª REUNIÓN — 31ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación) — 28 DE NOVIEMBRE DE 1996

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**

del vicepresidente del Honorable Senado, doctor **ANTONIO F. CAFIERO**
y del vicepresidente 1º del Honorable Senado, don **LEOPOLDO MOREAU**

Secretarios: doctor **EDGARDO R. PIUZZI** y doctora **MATILDE DEL VALLE GUERRERO**

Prosecretarios: señor **MARIO L. PONTAQUARTO** y doctor **DONALDO A. DIB**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
BAUM, Daniel
BAUZÁ, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo R. G.
UDIN, Ernesto R.
OYARZÚN, Juan C.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero

QUINZIO, Bernardo P.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVEVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES, CON AVISO:

AVELÍN, Alfredo
BRAVO, Leopoldo
CANTARERO, Emilio M.
HUMADA, Julio C.
LÓPEZ, Alcides H.
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MENECHINI, Javier R.
PARDO, Angel F.
TELL, Alberto M.

POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en tres proyectos de ley sobre el Régimen de Adopción (C.D.-51/94; S.-420 y 881/95). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 7379.)
2. Moción de reconsideración formulada por el señor senador Moreau con respecto al proyecto de ley aprobado en la reunión anterior por el que se determina la región patagónica a los efectos de las exportaciones y los beneficios contemplados en la ley 23.018 y sus modificatorias. Se rechaza. (Pág. 7411.)
3. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en dos proyectos de ley: uno, del señor senador Figueroa y el otro, de los señores senadores Villarreal y Fadel (m. c.), sobre cuestiones limítrofes entre Santiago del Estero y Catamarca (S.-207/96 y 736/95). Se resuelve postergar la consideración del tema. (Pág. 7414.)
4. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del que es autor sobre nominación de la Ciudad de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos del 2004 (S.-2.509/96). (Pág. 7452.)
5. Consideración del dictamen de las comisiones de Vivienda, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto de ley de los señores senadores Gioja y Maranguello por el que se modifican los artículos 5º y 22 de la ley 24.404. A moción del señor senador Maranguello se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de ley en revisión sobre el mismo tema (C.D.-119/96). (Pág. 7453.)
6. A moción del señor senador Verna se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo acordado para la cancelación de deudas y obligaciones originadas por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (P.E.-724/96). (Pág. 7457.)
7. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Pesca y de Ecología y Desarrollo Humano, en mayoría y minoría, en dos proyectos de ley: uno de los señores senadores Ludueña y Mac Kethy; y el otro, de los señores senadores Melgarejo y Moreau, por los que se establece un régimen federal de pesca (S.-27 y 1.125/96). Se aprueba. (Pág. 7458.)
8. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda en la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados, vinculado con la observación del Poder Ejecutivo nacional al proyecto de ley 24.652 por el que se modifica la ley 23.848, de régimen de pensiones a los ex soldados conscriptos combatientes y civiles que participaron en las acciones bélicas del Atlántico Sur en 1982 (C.D.-151/95). (Pág. 7498.)
9. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Parque Nacional Quebrada del Condorito en la provincia de Córdoba (C.D.-92/96). (Pág. 7499.)
10. A moción del señor senador Caffero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se cede un terreno a la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires (C.D.-116/96). (Pág. 7502.)
11. A moción del señor senador Caffero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se transfiere el dominio de diversos terrenos a la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires (C.D.-117/96). (Pág. 7502.)
12. A moción del señor senador Verna se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se exceptúa a cooperativas agropecuarias del pago de la contribución especial establecida en el artículo 6º de la ley 23.427 (C.D.-91/94). (Pág. 7503.)
13. A moción del señor senador Solana se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión sobre régimen de facilidades de pago para la deuda previsional e impositiva de las empresas de servicios integradas por ex agentes de YPF (C.D.-103/96). (Pág. 7504.)
14. A moción del señor senador Salum se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión sobre prestaciones obligatorias por parte de los servicios de medicina prepaga (C.D.-105/96). (Página 7506.)
15. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se amnistia a toda persona que hubiera incurrido en las infracciones previstas en diversos artículos de la ley 17.671, de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional (C.D.-47/96). (Pág. 7507.)
16. A moción del señor senador Berhongaray se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del que es autor por el que se dispone la creación de la Comisión Nacional Distribuidora de Cuotas de Exportación de Carne Vacuna (S.-1.629/96). (Página 7510.)
17. A moción del señor senador Oyarzún se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de ley en revisión sobre prevención y control antidoping en el deporte. (C.D.-66/95). (Pág. 7512.)
18. Manifestaciones del señor senador Caffero acerca de un proyecto sobre contaminación hídrica (Página 7525.)
19. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita se instruya la utilización de balsas en el tramo Zárate-Talavera, Talavera-Zárate, debido a la suspensión del tránsito de vehículos sobre uno de los puentes

del complejo **Zárate-Brazo Largo** (S.-2.545/96). (Pág. 7525.)

20. A **moción** del señor senador **Mac Karthy** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de comunicación** del que es autor junto con el señor senador **Sala** sobre la situación de virtual **emergencia económica** que sufre una parte de la **región del noroeste del Chubut y sudoeste de Río Negro** (S.-2.370/96). (Pág. 7526.)
21. A **moción** del señor senador **Verna** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de ley en revisión** por el que se prevé la **ampliación del plazo** desde el momento en que se apruebe el **reglamento de la zona franca** hasta cuando se inicie la obra (C.D.-85/96). (Pág. 7527.)
22. A **moción** del señor senador **Branda** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de ley en revisión** por el que se declaran **no laborables** el día del "**Año Nuevo Musulmán**" y el día de la "**Fiesta del Sacrificio**" (C.D.-87/95). (Pág. 7528.)
23. A **moción** del señor senador **San Millán** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de ley** del señor senador **Menem** por el se dispone la **cesión del Parque Provincial Talampaya, La Rioja, al Estado nacional** (S.-2.318/96). (Pág. 7528.)
24. A **moción** del señor senador **San Millán** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de ley** del que es autor por el que se declara de **utilidad pública** y sujeto a **expropiación** el inmueble donde vivió el **general Martín Miguel de Güemes** (S.-2.334/96). (Pág. 7529.)
25. A **moción** del señor senador **Berhongaray** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de ley en revisión** sobre **contrato de explotación tambera** (C.D.-92/94). (Pág. 7531.)
26. A **moción** del señor senador **Cafiero** se considera sobre tablas y se aprueba el **dictamen** de las comisiones de **Recursos Hídricos y de Ecología y Desarrollo Humano** en el **proyecto de ley** del que es autor sobre **Creación del Sistema Nacional de Reducción de Contaminación Hídrica** (S.-453/95). (Pág. 7533.)
27. A **moción** del señor senador **San Millán** se considera sobre tablas y se aprueba el **dictamen** de las comisiones de **Asuntos Administrativos y Municipales, de Defensa Nacional, de Ecología y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda** en las **modificaciones introducidas** por la Honorable Cámara de Diputados al **proyecto de ley** del que es autor, que le fuera pasado en **revisión**, por el que se declara **área de conservación** al **inmueble propiedad** del Estado nacional denominado **Campo General Belgrano, Salta**; y la **comunicación** de la **Secretaría Parlamentaria** de la Honorable Cámara de Diputados, sobre un **error material** en el artículo 6º, inciso c) (S.-1.552/94 y C.D.-83/96). (Pág. 7535.)
28. A **moción** del señor senador **Alasino** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de comunicación** del que es autor por el que se dispone el **diferi-**

miento y/o eximición de los vencimientos de **cargas impositivas y previsionales**, y la **postergación** de los **créditos contraídos** con entidades dependientes del Estado nacional, a los **comercios** cuya **fuentes de ingresos** sea en su mayoría dependiente del **tránsito vehicular** que emplea como **ruta necesaria** los puentes del **complejo Zárate-Brazo Largo** (S.-2.546/96). (Pág. 7537.)

29. Apéndice:

- I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 7538.)
- II. Inserciones. (Pág. 7552.)

— En Buenos Aires, a las 16 y 1 del jueves 28 de noviembre de 1996:

Sr. Presidente (Moreau). — Continúa la sesión.

1

REGIMEN DE ADOPCION

(Continuación)

Sr. Presidente (Moreau). — Corresponde continuar con la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en tres proyectos de ley: el primero, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados; el segundo, de la señora senadora Rivas; el tercero, del señor senador Cafiero sobre el Régimen de Adopción. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 1.389.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad, han considerado el proyecto de ley venido en revisión C.D.-51/94 y los proyectos de ley de la señora senadora Rivas (S.-420/95) y del señor senador Cafiero (S.-881/95) sobre el Régimen de Adopción; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º — La adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción de un mayor de edad o

de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:

1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante. En este caso se otorgará en carácter de adopción simple.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad judicial.

Art. 2º — Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 3º — Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.

Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple.

Art. 4º — La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso aquellos podrán ser oídos por el juez o el tribunal, con la asistencia del asesor de menores si correspondiere.

Art. 5º — Créase el Registro Unico de Aspirantes a la Adopción, el que dependerá de la autoridad de aplicación, que se determinará por vía reglamentaria.

Art. 6º — Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta ley cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

- a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Aún por debajo de este término, podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos;
- b) Los ascendientes a sus descendientes;
- c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

Art. 7º — El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año el que será fijado por el juez.

El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda.

La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono del mismo.

Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Art. 8º — Son requisitos para otorgar la guarda:

- a) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El

juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación.

La citación no será necesaria cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial. Tampoco será necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción;

- b) Tomar conocimiento personal del adoptado;
- c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses del menor con la efectiva participación del ministerio público, y la opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin;
- d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c) bajo pena de nulidad.

Art. 9º — Se prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo.

Art. 10. — El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

Art. 11. — Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

- a) Cuando medie sentencia de separación personal;
- b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores;
- c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.

Art. 12 — En el inicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

- a) La acción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante o el lugar donde se otorgó la guarda;
- b) Son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores;
- c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del menor y a su situación personal, oírá personalmente, si lo juzga conveniente al adoptado, conforme al derecho que lo asiste y a cualquier otra persona que estime conveniente en beneficio del menor;

- d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes; así como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio de Menores requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes;
- f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados y los peritos intervinientes;
- g) El juez o tribunal no podrá entrar o remitir los autos, pudiendo solamente expedir testimonios de sus constancias cuando sean beneficiosas para el menor a juicio del juez o tribunal de la adopción y sean requeridas por otros magistrados;
- h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica.

Art. 13. — La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda.

Quando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la fecha de promoción de la acción.

Capítulo II

Adopción plena

Art. 14. — La adopción plena, es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

Art. 15. — Podrá ser adoptante por adopción plena toda persona que reúna los requisitos establecidos en las disposiciones de la presente ley y no se encuentre comprendida en sus impedimentos.

Quando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el matrimonio y el periodo legal se completara después de la muerte de uno de los cónyuges podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

Art. 16. — Sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto a los menores:

- a) Huérfanos de padre y madre;
- b) Que no tengan filiación acreditada;
- c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial;

- d) Cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad;
- e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.

En todos los casos deberán cumplirse los requisitos previstos en los artículos 7º y 8º.

Art. 17. — El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste, al primero de la madre adoptiva.

En uno y en otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adición.

Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casada.

Art. 18. — Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 14.

Art. 19. — El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciséis años de edad.

Capítulo III

Adopción simple

Art. 20. — La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico; pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en esta ley.

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí.

Art. 21. — El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.

Art. 22. — Los derechos y deberes que resulten del vínculo de sangre del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.

Art. 23. — La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.

La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas.

Art. 24. — El adoptante hereda *ab intestato* al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda

los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

Art. 25. — El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes de los adoptantes; pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

Art. 26. — Es revocable la adopción simple:

- a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad de los supuestos previstos en el Código Civil para impedir la sucesión;
- b) Por haberse negado alimentos sin causa justificada;
- c) Por petición justificada del adoptado mayor de edad;
- d) Por acuerdo de parte manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad.

La revocación extingue desde su declaración judicial y para lo futuro todos los efectos de la adopción.

Art. 27. — Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el artículo 22.

Capítulo IV

Nulidad e inscripción

Art. 28. — Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil:

1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

- a) La edad del adoptado;
- b) La diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el mismo y/o sus padres. El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor.
- d) La adopción simultánea por más de una persona salvo que los adoptantes sean cónyuges;
- e) La adopción de descendientes;
- f) La adopción de hermanos y de medio hermanos entre sí.

2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

- a) La edad mínima del adoptante;
- b) Vicios del consentimiento.

Art. 29. — La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Capítulo V

Efectos de la adopción conferida en el extranjero

Art. 30. — La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiere sido conferida en el extranjero.

Art. 31. — La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción plena establecida por la presente ley.

Capítulo VI

Disposición transitoria

Art. 32. — En los casos en que hubiese guarda extrajudicial anterior a la entrada en vigencia de la presente ley, el juez podrá computar el tiempo transcurrido en guarda conforme al artículo 7º.

Art. 33. — Derógase la ley 19.134 y sus modificaciones.

Art. 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa, directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 22 de octubre de 1990.

Ricardo A. Branda. — Fernando V. Cabana. — Augusto J. M. Alasino. — Bernardo P. Quinzio. — Jorge A. Villaverde. — Olijela del Valle Rivas. — Jorge R. Yoma. — Horacio A. Zalazar. — José Genoud. — Antonio T. Berhongaray. — Pedro G. Villarroel. — Juan C. Oyarzún.

En disidencia parcial I:

Cristina E. Fernández de Kirchner.

En disidencia parcial II:

Julio A. San Millán.

En disidencia parcial III:

Graciela Fernández Meijide.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

Las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad han considerado el proyecto de ley venido en revisión y los proyectos de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Cafiero, sobre el instituto de la adopción, y en ejercicio de la facultad de revisión han efectuado reformas a la sanción de la Honorable Cámara de Diputados:

A efectos de una mayor comprensión de las modificaciones incorporadas por este Senado, las mismas se fundamentan en los argumentos que se detallan a continuación:

1º — En el artículo 1º se suprime la edad de catorce años y se reemplaza por la verificación que el juez debe efectuar respecto al estado de hijo del adoptado.

El fundamento de la presente modificación obedece a que al limitarse la edad del menor a catorce años quedarían excluidos aquellos menores que superen esta edad configurándose así un hecho arbitrario, razón por la cual se ha considerado más equitativo que dicho estado sea debidamente comprobado por la autoridad judicial.

2º — En el artículo 3º se agrega, como segundo párrafo, el primer párrafo del artículo 9º de la ley 19.134 el que se ha considerado importante no excluir del texto. Así se establece que, si se adoptara a varios menores, todas las adopciones serán del mismo tipo. De esta manera se equipara el status de las adopciones evitando diferencias entre los hijos adoptivos.

3º — Se incorpora como artículo 5º la creación del Registro Único de Aspirantes a la Adopción.

La finalidad de esta creación radica en que todos los aspirantes a la adopción tengan las mismas posibilidades, unificándose las diversas solicitudes que se registren a nivel nacional respecto a los peticionantes. Asimismo, se establece que sea respetado indefectiblemente el orden cronológico de la inscripción de los aspirantes a la adopción, evitando de este modo todo tipo de maniobras y dilaciones absolutamente injustas en el trámite tal como ocurre en nuestros días.

4º — En el artículo 6º se modifica el tiempo de residencia mínima de los aspirantes a la adopción, el que se eleva a cinco años. El o los adoptantes deben acreditar al momento del pedido de la guarda este plazo, garantizándose así una mayor seguridad al procedimiento de la guarda y de la futura adopción.

Esta modificación apunta a evitar que personas extranjeras, consignando domicilios falsos o transitorios, puedan acceder a la adopción de menores con la finalidad de llevarlos al exterior. Se ha considerado especialmente esta situación ya que con mecanismos como los existentes y los que agravados mediante la entrega de menores en guarda por escritura pública o acto administrativo, configuran un tráfico de menores, el que sin lugar a dudas este texto legal intenta impedir.

5º — En el artículo 7º se agrega un tercer párrafo, mediante el cual se determina que será competente para otorgar la guarda el juez del lugar donde judicialmente se hubiere comprobado el abandono del menor.

Se trata de evitar conflictos en materia de competencia entre el juez del domicilio del menor y el del lugar donde el mismo fue abandonado.

6º — En el artículo 8º se reemplaza la palabra “padres” por la de “progenitores”, considerando más apropiado este término.

En el segundo párrafo se agrega que no será necesaria la citación de los padres cuando el menor estuviera en un establecimiento asistencial y los mismos se hubieran desentendido totalmente de éste durante un año.

Este plazo puede reducirse cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente, manifiesto y continuo y esta situación hubiera sido comprobado por la autoridad judicial. Ello sin perjuicio de la tarea que el juez deberá llevar a cabo al valorar los supuestos de incapacidad temporaria u otro impedimento de los padres para comunicarse con su hijo.

Se agregan los términos “manifiesto y continuo” con el propósito de responder a la necesidad de evitar que algunos padres coloquen a sus hijos en centros asistenciales y antes del vencimiento del plazo de un año interrumpan con su presencia este plazo. De este modo, se impide que, mediante este accionar, los menores queden en una constante situación de desamparo y que el juez se encuentre imposibilitado de resolver con el texto legal vigente.

Al final del segundo párrafo se agrega que tampoco será necesaria la citación de los progenitores cuando éstos hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción. Este párrafo estaba contemplado en el inciso c) del artículo 11 de la ley 19.134 y se ha considerado necesario su incorporación.

Asimismo se agrega que el juez con la finalidad de otorgar la guarda deberá dar efectiva participación al Ministerio Público el que es parte en el trámite de adopción.

Mediante esta incorporación se otorga al Ministerio Público un mayor control de legalidad y una efectiva participación jurisdiccional.

Se establece un estricto procedimiento para otorgar a los menores en guarda. Si bien se agiliza el trámite con miras a la adopción, no por ello se deja de lado el efectivo cumplimiento de todos los requisitos que en forma taxativa establece la ley con esa finalidad.

7º — Se agrega el artículo 9º mediante el cual se prohíbe en forma expresa la entrega de los menores en guarda, ya sea por escritura pública o acto administrativo.

A partir de la sanción de esta ley, será únicamente el juez o tribunal quien disponga la entrega de menores en guarda.

Esta nueva disposición tiene como principal objeto el desalentar e impedir la entrega de menores, que en forma absolutamente fraudulenta y en infracción a normas legales se lleva a cabo en nuestro país. Esta modificación tiene como principal fundamento evitar el tráfico de niños.

8º — En el artículo 11 se establece que las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente.

Dentro de las excepciones a esta regla, se agrega el inciso c) que determina que un solo cónyuge podrá adoptar cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.

9º — En el artículo 12 se agrega al inciso c) que el juez, dentro del trámite de adopción deberá observar ciertas reglas. Se agrega que el juez o tribunal, de acuerdo a la edad del menor y a su situación personal, oír personalmente al mismo si lo juzga conveniente, conforme al derecho que lo asiste. Este agregado tiene como principal fundamento que el juez o tribunal tome contacto directo con el menor a fin de llevar a cabo una evaluación adecuada y completa de la situación del mismo, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

De igual modo, en el inciso d) del mismo artículo se agrega que el juez o tribunal deberá tener en consideración la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado. Con esta modificación se intenta evitar

que exista una gran diferencia de edad entre hijo adoptivo y adoptante que evidencien la existencia del vínculo adoptivo.

10. — En el artículo 14 se agrega que la adopción plena es irrevocable. Esta disposición se encuentra en la ley vigente y no existen motivos para proceder a su exclusión.

Se excluye el párrafo que expresaba: "sólo podrá ser revocada por sentencia judicial por las causales establecidas en el artículo 307 del Código Civil".

Esta supresión obedece a que se agrega al primer párrafo de este artículo que "la adopción plena" es irrevocable y que confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. En consecuencia, el mencionado párrafo resultaba redundante.

11. — En el artículo 16 se enumeran taxativamente los casos en los que podrá otorgarse la adopción plena.

Si bien algunos de éstos coinciden con los establecidos en el artículo 8º respecto de la guarda, se ha considerado conveniente reiterarlos.

12. — En el artículo 20 se agrega un segundo párrafo extraído del artículo 20 de la ley 19.134 que dice que: "los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí".

Con esta inclusión se pretende evitar diferencias que pueden ser perjudiciales para los hijos adoptivos.

13. — Dentro de los supuestos de nulidad absoluta de la adopción, en el artículo 28, inciso c), se contempla el caso de adopción de menores que tengan como antecedentes necesarios un hecho ilícito. Se establece que en estos casos el juez o tribunal deberá valorar exhaustivamente el interés superior del menor.

Este artículo contempla los supuestos de las adopciones que se realizaron con aquellos menores cuyos padres fueron víctimas de delitos o donde los mismos menores fueron víctimas, como por ejemplo los nacidos en cautiverio o los que fueron sustraídos de su familia de origen durante la última dictadura militar.

La comisión agrega este segundo párrafo, que tiene como principal fundamento que sean respetados y considerados los intereses del menor en situaciones conflictivas como las que se plantean en este inciso.

Nadie puede desconocer los casos en que después de largos años de convivencia con los "supuestos" padres, luego acusados de haber obtenido a ese menor en forma ilícita se ha procedido a "separar" al mismo de esa familia para entregarlo a su familia biológica, con el consiguiente daño psicológico que ello implica para el menor.

Esta problemática de carácter social debe contemplarse en cada caso concreto, y fundamentalmente el objeto de esta reforma es que el juez deba escuchar personalmente al menor y evaluar exhaustivamente la situación, para que de esta forma en su resolución se contemple el interés superior del mismo.

Se agrega, asimismo, en el inciso f) de este artículo el supuesto que contempla la nulidad de la adopción cuando se realiza entre hermanos y medio hermanos.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Ricardo A. Branda.

Disidencia del señor senador Julio Argentino San Millán al dictamen de comisión producido respecto del C.D.-51/94, S.-420/95 y S.-881/95

Sustitúyese el inciso d) del artículo 12 del dictamen de comisión por el siguiente:

El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes, así como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado. Tendrán preferencia para el otorgamiento de la adopción los matrimonios legalmente constituidos y, en su defecto, las uniones de hecho que acrediten una convivencia continuada no menor a los cinco (5) años a la fecha de solicitud de la adopción.

Julio A. San Millán.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La disidencia que se presenta tiene su origen en un precepto que, actualmente, resulta universalmente reconocido, cual es que lo que se procura mediante el instituto de la adopción es, fundamentalmente, el beneficio del menor dado en adopción.

A esos efectos es que se entiende que un hogar conformado por un padre y una madre con el viso de continuidad temporal que cabe presumir de un matrimonio legalmente constituido o, a falta de éste, de una unión de hecho con cierta estabilidad previa, constituyen un mejor ámbito de contención y afecto para que el niño pueda desarrollarse plenamente.

Y no se entienda que la modificación que se pretende introducir se encuentra imbuida de un carácter excluyente ni discriminatorio pues, lo que se procura, es establecer un orden de preferencia aplicable a determinadas situaciones de hecho y de derecho en las que el juez se encuentra, por un lado, frente a un niño en condiciones de ser otorgado en adopción y, por el otro ante un listado de adoptantes.

De otro lado, distintas condiciones de hecho del menor contempladas por la ley, así como la inexistencia de matrimonios o uniones de hecho con vocación de adopción, viabilizan la posibilidad de ser adoptantes para cualquier persona que cumpla con el resto de los requisitos legales, de manera que nadie está quedando excluido, ya que, insisto, lo que se establece es una preferencia que tiene en vista el beneficio del menor a la luz de la valoración que, en última instancia, deberá hacer el juez interviniente.

Julio A. San Millán.

Disidencia parcial de la senadora Graciela Fernández Meijide en relación al dictamen de la Comisión de Legislación General y Familia y Minoridad del Honorable Senado de la Nación

Al proyecto de ley de Régimen de Adopción

Señor presidente:

Quiero expresar mi apoyo en general al dictamen de la Comisión de Legislación General y Familia y Minoridad.

dad, referido al proyecto de ley venido en revisión sobre Régimen de Adopción C.D.-51/94, pero voy a sostener en la votación en particular, disidencias en puntos vitales que deberían ser incorporados al texto que se apruebe.

La sociedad hace tiempo que viene reclamando un cambio legislativo en lo referente a la adopción de niños, por eso es importante la pronta sanción de esta ley. Ya me ocupé de este tema, presentando un proyecto en la Cámara de Diputados, centrando el interés en el niño.

El problema al que nos enfrentamos los legisladores, consiste en cómo simplificar su trámite sin que ello implique cercenar los derechos del niño, de su familia de origen, de los adoptantes, ni otorgar menor tiempo del que precisan para su adaptación el niño o niña y su adoptante.

Debemos tener en cuenta que existen tres sujetos: el niño, la familia biológica y los adoptantes.

La adopción debe facilitarse y simplificarse, pero también debe controlarse adecuadamente con el objeto de que pueda desempeñar su función social.

El interés primordial que debe primar es el del niño, quien al carecer de un ámbito familiar deberá ser incorporado a otro, que aparece como tal.

La adopción resulta entonces ser el medio más satisfactorio para integrar a aquellos chicos que no tienen una familia natural o cuyos padres han perdido la patria potestad, a un nuevo grupo familiar.

Queda claro que en la adopción el bien jurídico tutelado lo constituye primordialmente la infancia que carece de un entorno familiar.

La ley 19.134, del año 1971, vigente en la actualidad, si bien resultó adecuada para regular esta problemática, en estos momentos precisa ser *aggiornada* y adecuada a la realidad de nuestros días. Fundamentalmente en todo aquello que se refiere a prever el derecho a la identidad del adoptado, a la prohibición de otorgar la guarda por un medio distinto que el judicial, a flexibilizar sus requisitos y asegurar un consentimiento de los padres biológicos libre y consciente, con conocimiento de las implicancias de su decisión.

La realidad social debe estar contemplada en el derecho, de allí la labor esencial, de quienes intervenimos en la sanción de normas generales, por el riesgo que implica legislar institutos sin conocer la experiencia y tener en cuenta las consecuencias de las decisiones que se adopten. No podemos, ni debemos tomar medidas o reformas sin un previo análisis de la situación real, concreta y de las consecuencias que se derivarán de las reformas introducidas.

En este sentido, en el artículo 8º, en el cual se establecen una serie de recaudos para otorgar la guarda, se ordena en el inciso a) la citación de los progenitores del niño a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción, y que "el juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación".

Ahora bien, con la redacción que tiene el párrafo señalado, el juez va a determinar discrecionalmente la oportunidad de dicha citación.

Esta citación es importante, y yo diría fundamental, debido a que le otorga seguridad jurídica a la guarda. Los padres biológicos deben dar un consentimiento conociendo las consecuencias que tiene el mismo, la finalización de la patria potestad. Es decir, que todo progenitor que se encuentre en situación de proceder a la entrega de su hijo, debe recibir el apoyo adecuado para entender las implicancias de su decisión.

Es importante entender que durante el puerperio la mujer puede no comprender totalmente el desenlace de sus actos, muchas veces se encuentra en una situación psicológica que no le permite decidir libremente. Por ello, en el caso de recién nacidos, dicho consentimiento debe darse pasados los cuarenta y cinco días del nacimiento.

El consentimiento dado, de manera adecuada, constituye una garantía obviamente para los adoptantes, toda vez que una guarda dada en esas circunstancias es irrevocable.

Uno de los puntos que más se cuestiona de la ley 19.134 es la discrecionalidad del juez para citar a los padres biológicos del menor durante el juicio de adopción. Por ello, la modificación del Régimen de Adopción, constituye una oportunidad para brindarles a los padres biológicos la calidad de partes, citarlos a brindar su consentimiento, como requisito previo al otorgamiento de la guarda con fines de adopción. Sin embargo, este consentimiento debe ser dado luego de los cuarenta y cinco días del nacimiento del bebé.

Por todo lo expuesto, el texto que propongo aprobar en lugar del artículo 8º, inciso a), párrafo primero, es el siguiente: "Citar a los progenitores del niño a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción, una vez transcurridos cuarenta y cinco días del nacimiento del niño. Durante dicho período el juez implementará medidas que favorezcan la continuidad del vínculo materno-filial".

Graciela Fernández Meijide.

ANTECEDENTES

I

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(14 de septiembre de 1994)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º—La adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante.

La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:

1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.

2. Exista estado de hijo del adoptado desde antes de los catorce años de edad.

Art. 2º — Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 3º — Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo, simultánea o sucesivamente.

Art. 4º — La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso aquéllos podrán ser oídos por el juez o tribunal si lo considera necesario.

Art. 5º — Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta ley, cualquiera fuere su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de tres años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

- a) Quiénes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Aun por debajo de este término podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos;
- b) Los ascendientes a sus descendientes;
- c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

Art. 6º — El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año que será fijado por el juez. El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda. La guarda deberá ser otorgada judicialmente por el juez o tribunal del domicilio del menor. Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Art. 7º — Son requisitos para otorgar la guarda:

- a) Citar a los padres del menor a fin de que presenten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación. La citación no será necesaria cuando el menor estuviere en un establecimiento asistencial y los padres se hubieren desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resultare evidente y hubiere sido comprobado por la autoridad judicial. Tampoco será necesaria cuando los padres hubieran sido privados de la patria potestad;
- b) Tomar conocimiento personal del adoptando;
- c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses del menor y atendiendo la opinión de los equipos técnicos consultados a esos efectos y del ministerio público;

- d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c) bajo pena de nulidad.

Art. 8º — El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

Art. 9º — Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

- a) Cuando medie sentencia de separación personal;
- b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador o al ministerio público de menores si el curador fuera el cónyuge adoptante;
- c) Cuando se declare la ausencia con presunción de fallecimiento de otro cónyuge.

Art. 10. — En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

- a) La acción debe imponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante, o el lugar donde se otorgó la guarda;
- b) Son partes el adoptante y el ministerio público de menores;
- c) El juez o tribunal oírán personalmente si lo juzga necesario al adoptando y a cualquier persona que estime conveniente en beneficio del menor;
- d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor, teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes;
- e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio de menores requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes;
- f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados y los peritos intervinientes;
- g) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, pudiendo solamente expedir testimonios de sus constancias cuando sean beneficiosas para el menor a juicio del juez o tribunal de la adopción, y sean requeridas por otros magistrados;
- h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptando su realidad biológica.

Art. 11. — La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda. Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la fecha de promoción de la acción.

Capítulo II

Adopción plena

Art. 12. — La adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. Sólo podrá

ser revocada por sentencia judicial por las causales establecidas en el artículo 307 del Código Civil. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene, en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

Art. 13. — Podrá ser adoptante por adopción plena, toda persona que reúna los requisitos establecidos en las disposiciones de la presente ley y no se encuentre comprendida en sus impedimentos.

Cuando la guarda del menor hubiere comenzado durante el matrimonio y el período legal se completare después de la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

Art. 14. — Sólo podrá otorgarse la adopción plena de los menores cuando se hayan cumplido con los requisitos de los artículos 6º y 7º.

Art. 15. — El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación. En caso de que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos, podrá agregarse al adoptado el apellido compuesto del padre adoptivo y el de la madre adoptiva. En uno y en otro caso, podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adopción. Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquella, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casada.

Art. 16. — Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 12.

Art. 17. — El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciséis años de edad.

Capítulo III

Adopción simple

Art. 18. — La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico, pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en esta ley.

Art. 19. — El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.

Art. 20. — Los derechos y deberes que resulten del vínculo de sangre del adoptado no quedan extinguidos por la adopción, con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor, que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.

Art. 21. — La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años. La viuda

adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas.

Art. 22. — El adoptante hereda *ab intestato* al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos, pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica, ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiere recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes, los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

Art. 23. — El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes del adoptante, pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

Art. 24. — Es revocable la adopción simple:

- Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad en los supuestos previstos por el Código Civil para impedir la sucesión;
- Por haberse negado alimentos sin causa justificada;
- Por petición justificada del adoptado mayor de edad;
- Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad.

La revocación extingue, desde su declaración judicial y para lo futuro, todos los efectos de la adopción.

Art. 25. — Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de esas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el artículo 21.

Capítulo IV

Nullidad e inscripción

Art. 26. — Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil:

1. Adolecera de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación a lo preceptuado respecto de:

- La edad del adoptado;
- La diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiere sido víctima el mismo y/o sus padres;
- La adopción simultánea por más de una persona si no se tratara de cónyuges;
- La adopción de descendientes y de hermanos y medio hermanos.

2. Adolecera de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

- La edad mínima del adoptante;

b) Vicios del consentimiento.

Art. 27. — La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Capítulo V

Efectos de la adopción conferida en el extranjero

Art. 28. — La situación jurídica, los derechos y deberes de adoptantes y adoptados entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiere sido conferida en el extranjero.

Art. 29. — La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de la adopción plena establecida en la presente ley.

Capítulo VI

Disposición transitoria

Art. 30. — En los casos en que hubiere guarda extrajudicial anterior a la vigencia de esta ley el juez podrá computar el tiempo transcurrido en guarda conforme al artículo 6º.

Art. 31. — Derógase la ley 19.134 y sus modificaciones.

Art. 32. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.

*Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.*

II.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 5º de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 5º: No podrán adoptar quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que acrediten la imposibilidad de procrear. Tampoco podrá adoptar un abuelo a su o sus nietos.

Art. 2º — Modifícase el artículo 6º de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 6º: El adoptante deberá hacer tenido al menor bajo su guarda durante seis meses, aunque este plazo puede ser ampliado por el juez o tribunal por resolución fundada. Esta condición no se requiere cuando se adopta al hijo o hijos del cónyuge. En el caso previsto en el artículo 11, inciso b), el organismo administrativo deberá comunicar la situación al juez para que el mismo decrete la guarda del menor si correspondiese, y cite a los progenitores a efectos de comprobar el abandono del menor.

Art. 3º — Modifícase el artículo 8º de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 8º: Ninguna persona casada podrá adoptar sin el consentimiento de su cónyuge. Dicho consentimiento no es necesario:

- Para el cónyuge inocente cuando medie divorcio o separación legal por culpa del otro cónyuge;
- Cuando el divorcio o la separación legal ha sido por culpas concurrentes o por mutuo consentimiento;
- En los casos de separación de hecho sin voluntad de unirse por lapso mayor de dos años;
- Cuando el cónyuge ha sido declarado insano;
- Cuando el cónyuge ha sido declarado ausente con presunción de fallecimiento.

Art. 4º — Modifícase el artículo 11 de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 11: El padre o la madre del menor no serán necesariamente citados al juicio, y no se admitirá su presentación espontánea en los siguientes casos:

- Cuando hubieran perdido la patria potestad;
- Cuando se hubiere confiado espontáneamente al menor a un establecimiento de beneficencia o de protección de menores público o privado por no poder proveer a su crianza y educación y se hubiera desentendido injustificadamente del mismo en el aspecto afectivo y familiar durante el plazo de seis meses;
- Cuando hubieren manifestado expresamente su voluntad de que el menor sea adoptado ante el órgano estatal competente o la autoridad judicial;
- Cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente por haber sido abandonado en la vía pública o sitios similares y tal abandono sea comprobado por la autoridad judicial.

Art. 5º — Agrégase como inciso c) del apartado 1 del artículo 30, lo siguiente:

- Igualmente adolecerá de nulidad absoluta la adopción otorgada cuando el aparente abandonó del menor proviniera de un hecho ilícito o delito del cual hubieren sido víctimas el adoptado y/o sus progenitores. Los efectos de esta disposición se aplicarán igualmente a los hechos producidos con anterioridad a la vigencia de la presente. En los supuestos anunciados en este inciso no se presumirá la buena fe de los adoptantes.

Art. 6º — Modifícase el artículo 19 de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 19: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adop-

tado por sus padres de sangre ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento matrimonial derivado de lo establecido en la ley 23.515.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Olijela del Valle Rivas.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley modificatorio de la ley de adopción, está orientado primordialmente al objetivo de adecuar y flexibilizar este instituto como forma de mejor proveer al cuidado y beneficio de los menores pasibles de ser adoptados.

La modificación propuesta al artículo 5º, bajando a treinta años la edad mínima requerida en los adoptantes, responde a las modernas tendencias legislativas y además a la idea de dotar al niño que carece de familia de padres jóvenes y activos.

En el caso de una pareja de cónyuges, que acredite la imposibilidad de procrear, consideramos innecesario mantener el lapso de 5 años de matrimonio previo para permitir la adopción. Persiguiendo el objetivo de lograr la integración de núcleos familiares, se debe tratar de subsanar los impedimentos o trabas que lo obstaculicen. Si se ha acreditado fehacientemente la imposibilidad de procrear, no existe motivo valedero para retrasar la adopción por parte de los cónyuges, privando a éstos y a los niños pasibles de integrar su familia adoptiva, de la posibilidad de concretarla más rápidamente, con los beneficios que de ello derivan para todos los integrantes.

En el artículo 6º de la ley, se propicia la reducción del plazo de guarda del menor a seis meses. La aplicación práctica del instituto legal de la adopción ha demostrado que el plazo anteriormente fijado (un año), no sólo resultaba demasiado largo para el sentir de los integrantes de la nueva familia, sino que despertaba en éstos, en la mayor parte de los casos, una gran angustia. La misma derivada de la incertidumbre respecto a si se consolidaría o no su relación una vez transcurrido ese tiempo; pero lo más grave es que en algunos casos esta situación derivaba en un esfuerzo consciente de los padres adoptivos por no ligarse afectivamente con el niño, ante el temor de que luego la adopción no se concretara.

Por otra parte, no puede desconocerse la importancia de un período de prueba preadoptiva, en el cual el niño y los adoptantes deben adaptarse y aceptarse recíprocamente.

Creemos que esto se satisface adecuadamente en un período de seis meses, sin perjuicio de que el juez o tribunal, por resolución fundada, lo extiendan de considerarlo necesario en un caso específico.

En la última parte del artículo 6º propuesto, se hace referencia al artículo 11, inciso b), es decir la situación conocida generalmente como abandono.

Creemos que éste se configura cuando hay incumplimiento por parte de los progenitores, de sus obligacio-

nes como tales, y además existe una ruptura de los lazos afectivos que los unen a sus hijos. Esto es muy difícil de acreditar, ya que se producirá generalmente en forma paulatina, con un desinterés progresivo, situación que puede prolongarse por períodos largos, incluso de años. Como la ley debe fijar un plazo para que su transcurso determine en estado de abandono del niño a los efectos de su adopción, y tratando de respetar el principio de facilitar y acelerar en lo posible el beneficio del menor, los plazos existentes, proponemos seis meses.

Si durante este tiempo ha habido un manifiesto desinterés de los padres, extenderlo aún más puede llegar a producir daños irreparables a la salud física y psíquica del menor.

Las modificaciones propuestas al artículo 8º de la ley 19.134, lo han sido al efecto de adecuar esta norma a las previsiones de la ley 23.515. Esta última distingue entre la separación simple y el divorcio vincular, de manera que ambos supuestos deben ser igualmente contemplados a los efectos de la adopción.

En el artículo 11, en el cual se regula la participación de los padres biológicos en el juicio de adopción, se han mantenido los supuestos ya existentes en el texto legal, suprimiéndose solamente la posibilidad de entregar la guarda del menor por acto notarial. Este acto es común en la actualidad, y por el mismo la madre renuncia a la patria potestad y a todo derecho personal y patrimonial sobre el menor, presente y futuro.

Entendemos que un acto de tanta trascendencia en la vida del niño no puede ni debe hacerse de tal manera, que incluso puede facilitar la existencia de presiones morales o materiales sobre la madre para forzarla a su realización.

La guarda con fines de adopción sólo puede transmitirse ante la autoridad judicial, y en este tema surge inmediatamente la necesidad de instrumentación de los tribunales de familia ya que ellos garantizarían, en tema de tal importancia, la participación de auxiliares idóneos como asistentes sociales, psicólogos, etcétera.

Finalmente la reforma propuesta al artículo 19, tiene exclusiva finalidad de adecuarla a la urgencia de la nueva ley de matrimonio civil.

Por último, creemos útil traer a colación las recomendaciones del IX Congreso Panamericano del Niño, realizado en Caracas, Venezuela, en 1948, cuyas conclusiones fueron:

1º — La adopción debe facilitarse y simplificarse con el objeto de que pueda llegar a desempeñar, entre otros fines, la importante función social de propiciar un hogar a numerosos niños desamparados.

2º — La legislación sobre adopción debe inspirarse principalmente en el interés de los menores.

3º — En todo procedimiento de adopción, el juez deberá ser ampliamente informado por el servicio social respectivo, acerca de las cualidades personales de los padres carnales y de los peticionantes, sus condiciones de vida, su situación económica y moral, y en general, sobre todas aquellas circunstancias que sirvan para formarse un concepto.

Olijela del Valle Rivas.

—A las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 2º, segunda parte, de la ley 19.134, el que deberá quedar redactado de la siguiente manera:

El adoptante debe ser, por lo menos, dieciocho años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge supérstite adopte al hijo adoptado del premuerto o al hijo del cónyuge.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio F. Cafiero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 19.134 expresa en su artículo 2º que el adoptante debe ser por lo menos 18 años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

Esta norma ha sido criticada en doctrina por expresar categóricamente un principio general sentando luego una excepción que deja sin solución aceptable, supuestos que con relativa frecuencia arroja la experiencia judicial.

Frente a la norma reflexiona caracterizada doctrina: "... sea quizá el propósito de la norma contemplar la posibilidad de adopciones frente a aquellos casos en que el menor fue adoptado por uno solo de los cónyuges por no existir la diferencia de edades dispuesta por la ley respecto del otro y entonces es justo que a la muerte del adoptante no permanezca en el futuro siendo un extraño si, en los hechos, vive una relación paterna o materna que importa sea mantenida por sí misma..." (Zannoni-Orquín: *La adopción y su nuevo régimen legal*, pág. 35).

Pero no se ve por qué razón la excepción funciona solo en caso de muerte y sólo con los hijos adoptivos, y no cuando ambos cónyuges viven, ni cuando se trata de la adopción de hijos extramatrimoniales del otro cónyuge (Conf.: Mazzinghi, *Derecho de familia*, III, número 573, autor que califica el texto legal de "peñosamente redactado").

En el caso de la adopción de integración, que es aquella que procura obtener quien contrae matrimonio con una persona que tiene hijos, la aplicación a ultranza del texto legal llevaría a muchos casos a resultados no sólo injustos en lo objetivo, sino francamente inconvenientes para el menor que supuestamente se quiere proteger.

Imaginemos el caso de una mujer viuda y con un hijo, que contrae nuevo matrimonio y tiene incluso hijos de esta segunda unión. Imaginemos aún más que la relación entre los medio hermanos es completamente fraternal y que luego de varios años de armónica convivencia solicita el padrastro la adopción acreditando su comportamiento como verdadero padre de familia, las óptimas condiciones de la guarda que coexisten con su esposa y el afecto recíproco que mantiene con su hijastro.

De no acreditar la diferencia de edad de dieciocho años debiera ver frustrada su intención frente al texto lapidario de la ley y aunque le faltaran pocos meses. Y al calificar el texto de lapidario remito al artículo 30, inciso 1 b) que dispone la nulidad absoluta para la adopción obtenida en violación a los preceptos referentes a la diferencia de edad entre adoptante y adoptado.

Y el caso expresado de la madre viuda bien puede extenderse al del niño con filiación exclusivamente materna, cuya progenitora contrae matrimonio con un hombre que prefiere no recurrir al falso reconocimiento de un hijo que no ha tenido sino presentarse sinceramente al juez solicitando su adopción.

Como señala Zannoni, citando al jurista alemán Esser, cuando se aborda la interpretación de una norma vigente existen dos criterios: 1º) El de emprender una interpretación axiomática que toma como base la norma y sobre ella realiza la construcción de un silogismo; 2º) El de emprender una interpretación problemática, que parte de los problemas y los integra en las normas.

En este segundo supuesto transita la solución al tema que nos ocupa y que nos lleva a un camino que peligrosamente tiene a un lado la sanción de la nulidad absoluta por violentar la norma, y por el otro la necesidad de no hacerlo encontrando empero un resultado justo, cual sería el otorgamiento de la adopción.

Entendemos de *lege lata* que una adecuada interpretación de la Ley de Adopción así lo permitiría, pero propugnaremos, de *lege ferenda*, una reforma sustancial que no ofrezca lugar a interpretaciones distintas a la que a continuación se expone.

El segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Adopción contiene por un lado un principio general: que el adoptante debe ser por lo menos 18 años mayor que el adoptado; y a continuación una excepción: que ello no se requiere cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

El supuesto de la adopción del hijo biológico del cónyuge vivo es a nuestro entender más asimilable a la excepción que al principio general por lo que constituiría un supuesto no previsto. Ello por cuando toda excepción es de interpretación restrictiva y porque si bien puede esgrimirse la similitud no puede alegarse la identidad.

De ser así, y frente al silencio u omisión de la ley bien cabe la aplicación del artículo 16 del Código Civil que permitiría la analogía, y aún la aplicación de los principios generales del derecho, que son en el instituto de la adopción, eminentemente tuitivos.

Cabe agregar a ello que si la diferencia de edad entre adoptantes y adoptado tiende a procurar como toda la doctrina lo reconoce, que la relación adoptiva se asimile lo más posible a la filiatoria: ¿por qué tomar parámetros distintos en uno y otro caso, siendo que la aptitud para procrear es bastante menor que 18 años?

Y para finalizar, en aras a demostrar que el facilitar la adopción de integración es precisamente el fin querido por la ley remito a artículo 6º de su articulado que no requiere tiempo de guarda cuando se adopta al hijo o hijos del cónyuge.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente (Moreau). — Tal como lo dispuso la Cámara ayer, el tratamiento en particular se va a realizar por capítulos.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa del Partido Justicialista.

Sr. Branda. — Señor presidente: tal como quedó previsto en la reunión de ayer, solicito que se vote por capítulos y que, si algún señor senador quiere hacer alguna consideración en particular, así lo haga saber.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.

Sr. Menem. — Señor presidente: antes de proceder a la votación por capítulos, tal como he anticipado en mi exposición de ayer...

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Moreau). — La Presidencia solicita a los señores senadores se sirvan respetar al orador.

Continúe, señor senador.

Sr. Menem. — Tal como lo había anticipado ayer y por los fundamentos que no repetiré ahora, propongo que la institución de la adopción sea incorporada al Código Civil a partir del artículo 311.

Esto es perfectamente factible, como ayer lo explicaba, toda vez que el título de la legitimación, que es el Título IV de la Sección Segunda del Libro Primero, se encuentra vacante —por darle un nombre— habida cuenta de que fue suprimido por la ley 23.264.

Entonces, propondría que esta ley comience diciendo: "Incorpórase al Código Civil como Título IV de la Sección Segunda, Libro Primero, el siguiente texto." Diría: "Título IV: De la adopción. Capítulo I. Disposiciones Generales". Y a continuación vendría el artículo 1º de la ley, que pasaría a ser el 311 del Código Civil.

Esta es la propuesta metodológica que estoy formulando.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa del Partido Justicialista.

Sr. Branda. — Señor presidente, señores senadores: la comisión acepta la propuesta efectuada por el señor senador por La Rioja Eduardo Menem considerando que es de buena técnica

jurídica incorporar esta ley al Código Civil, para su mejor ordenamiento, circunstancia que hace también a la hermenéutica jurídica.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical aceptará la incorporación al Código Civil de las normas propuestas. Si habíamos pedido la incorporación de las normas referidas a un código exclusivo de Derecho de Familia, creo que de esta forma avanzaremos bastante si las incorporamos al Código Civil.

Sólo me queda la duda sobre si el artículo 5º del proyecto que nos ocupa habrá de considerarse en último término, luego de que sean tratados los restantes artículos.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Como el artículo 5º hace referencia, precisamente, a un registro que no es norma de fondo sino más bien procesal, propongo que el citado artículo —en caso de incorporarse— lo sea como artículo 2º de la ley.

Es decir, el artículo 1º contendría la incorporación de todas las normas, desde el artículo 311 hasta el 340. Luego, el artículo 2º de la ley se referiría al registro. A continuación, se incluiría un artículo 3º, que contendría la disposición transitoria.

Con ello, dejamos en el Código Civil la norma de fondo, estrictamente, como corresponde.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Agúndez. — O sea que se votarían, en el capítulo I, los artículos 1º a 13 inclusive, pudiéndose formular las observaciones respecto de esos artículos en esta oportunidad, dado que habrá de votarse por capítulos.

Sr. Menem. — Efectivamente.

Sr. Branda. — Así es.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del Partido Liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — ¿Se están refiriendo a los artículos 1º a 13, con exclusión del artículo 5º?

Sr. Presidente (Moreau). — Así se entiende, señor senador.

Según la propuesta del señor senador por La Rioja, dicho artículo pasaría a ser 2º, ¿verdad?

Sr. Menem. — El artículo 5º del dictamen pasaría a ser el artículo 2º de la ley.

Sr. Agúndez. — Pero el último en cuanto a su tratamiento.

Sr. Menem. — Sí

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa del Partido Justicialista.

Sr. Branda. — Tal como se solicitó al principio, creo que deberíamos votar por capítulos. En caso de que algún senador tenga alguna observación respecto de la forma en que quedó organizada la votación, solicito la exprese en este momento.

Sr. Presidente (Moreau). — Recuerdo a los señores senadores que estamos tratando el capítulo I del dictamen.

Se han hecho propuestas que, en principio, pareciera no cuentan con unanimidad. Pero ayer se resolvió que si no tenemos quórum —todavía no lo hemos logrado—, se posponga la votación y se siga considerando el resto de los capítulos.

Reitero que estamos en el tratamiento del capítulo I, con las propuestas que incorporó el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista, quien tiene ahora la palabra.

Sr. Menem. — Por más que se vote por capítulos, tengo propuestas para hacer con relación a distintos artículos del capítulo I. Aun cuando se ha dispuesto esta forma de votación —no sé qué vamos a ganar ahora—, solicito que sigamos considerando la iniciativa artículo por artículo.

Sr. Presidente (Moreau). — Muy bien.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe de la Unión Cívica Radical.

Sr. Usandizaga. — Iba a pedir que se leyera el artículo 8º para ver su redacción definitiva. Pero, evidentemente, el texto definitivo no está. Interpreto que el señor senador por La Rioja va a proponer cambiar su redacción.

Sr. Menem. — Así es.

Sr. Presidente (Moreau). — Propongo a la Cámara que continuemos con el tratamiento del capítulo I. En consideración.

—Se enuncia el artículo 1º.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — El artículo 1º del dictamen va a pasar a ser el artículo 311 del Código Civil. El inciso 1 dice: "Se trate del hijo del cónyuge del adoptante. En este caso se otorgará en carácter de adopción simple". Esta misma expresión está contenida en la última parte del artículo 3º, que dice: "La adopción del hijo del cónyuge siempre

será de carácter simple". Es decir, se repite el mismo concepto.

Realmente, la adopción del hijo del cónyuge es un caso especial. Creo que el texto está mejor ubicado en el artículo 3º y no en el 1º, que contiene una disposición general. Por eso, propongo que se suprima la segunda parte del inciso 1 del artículo 1º, por cuanto está conteniendo algo que queda expresado luego, en la última parte del artículo 3º. Pienso que es una repetición innecesaria y, metodológicamente, el texto está mejor ubicado —repito— en el artículo 3º.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: no tenemos ningún inconveniente. Una redundancia hace mejor a la técnica legislativa...

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa del Partido Justicialista.

Sr. Branda. — Señor presidente: creo que, en Derecho, lo que abunda no daña... Pero para no entrar en una discusión, voy a aceptar la supresión de la segunda parte del inciso 1 del artículo 1º. Es evidente que en este artículo quedan englobadas las disposiciones generales y el párrafo quedaría mejor ubicado en el artículo 3º.

Sr. Menem. — Lo que abunda no daña pero, a veces, confunde.

Sr. Presidente (Moreau). — Aceptado.

Sr. Menem. — Señor presidente: hasta que obtengamos quórum ¿continuamos con el artículo 2º?

Sr. Presidente (Moreau). — Sí, señor senador.

—Se enuncia el artículo 2º.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — El artículo 2º dice: "...Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor". Creo que esta parte está de más. En primer lugar, porque el artículo 14 habla de la irrevocabilidad de la adopción. En segundo lugar, esta frase haría una discriminación entre el hijo adoptivo y el biológico.

Cuando fallecen los padres de un hijo biológico menor de edad, se siguen los lineamientos generales del Derecho Civil. Si incorporamos esta ley al Código Civil, no tiene razón de ser que esté esa parte. En última instancia, podría

ser para el período de guarda pero no para el de adopción.

—Se llama para votar.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa del Partido Justicialista.

Sr. Branda. — Señor presidente: la comisión no va a aceptar la propuesta y voy a fundamentar el porqué.

El artículo 390 del Código Civil contiene la regla de la tutela para los casos de desprotección cuando se produjese una muerte. Pero hay que tener en cuenta que el menor puede ser adoptado nuevamente. En este supuesto el caso es igual a que si se tratase de un hijo biológico. Ahí es donde se iguala y sí habría una discriminación. Entiendo que al hijo adoptado hay que darle la posibilidad de que sea adoptado nuevamente, lo que se contempla en la segunda parte del artículo.

Sr. Presidente (Moreau). — O sea que la comisión no acepta en este caso la modificación propuesta.

Continuamos con la consideración de los artículos siguientes.

—Se enuncian los artículos 3º a 7º.

Sra. Fernández Meijide. — ¿Cómo quedó redactado el artículo 5º? ¿Podría dársele lectura? Había observaciones sobre ese artículo.

Sr. Presidente (Moreau). — Hubo una propuesta de modificación para que el artículo 5º pase a ser el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor miembro informante, a quien le pido que ilustre a la señora senadora acerca de esta cuestión.

Sr. Branda. — Señor presidente, señores senadores: para quienes no estuvieron presentes en el momento en que el señor senador por La Rioja Eduardo Menem hizo uso de la palabra, aclaro que pidió una modificación estructural para posibilitar así la incorporación de esta ley al Código Civil.

A los efectos de ganar tiempo y adelantar el tratamiento en particular, hemos resuelto ir planteando las modificaciones que se consideren convenientes y luego, cuando se alcance el quórum, votar por capítulos.

En el caso específico del artículo 5º, la propuesta del señor senador por La Rioja es que pase a ser el artículo 2º.

Sra. Fernández Meijide. — Muchas gracias, señor senador.

Sr. Presidente (Moreau). — Se continúa con el tratamiento del artículo siguiente.

—Se enuncia el artículo 8º.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.

Sr. Menem. — Señor presidente: tal como lo había anticipado en mi exposición, en este artículo voy a proponer la siguiente modificación. Concretamente, en la segunda parte del inciso a), propongo que se elimine la expresión "La citación no será necesaria..." y se la reemplace por "No se requerirá el consentimiento...", siguiendo luego la redacción original.

O sea, lo que plantea el dictamen es que no es necesaria la citación de los padres. Nosotros decimos que no es necesario el consentimiento pero sí la citación, de acuerdo con lo que señala la primera parte del inciso a).

¿Por qué decimos esto? Porque, como lo explicáramos ayer, hay una jurisprudencia denegatoria de muchos tribunales que han entendido que el solo hecho de ser padres les da un título para que estén presentes en los juicios de adopción o en la guarda, cualesquiera fuesen las circunstancias en que se encuentren los padres.

Una cosa es que no se requiera el consentimiento y otra es que no sean citados. Además es un principio de justicia, ya que pueden tener que decir algo. Si no tienen interés, no concurrirán y, en ese caso, desde luego que tampoco se generará un problema para la tramitación de la guarda. Esto es lo que hace a la propuesta del inciso a).

En el inciso b) se dice: "Tomar conocimiento personal del adoptado". Realmente no es adoptado sino "adoptando", ya que todavía no está adoptado, porque estamos hablando de la guarda.

Tengo una tercera propuesta, que no tiene la entidad de las anteriores, pero trata de unificar la denominación. Personalmente —y algunos coinciden—, me gusta más hablar de padres que de progenitores, porque es el lenguaje que más utiliza el Código Civil.

Entonces, el inciso a) diría "Citar a los progenitores del menor"; en su segunda parte "No se requerirá el consentimiento" y el inciso b) "adoptando" en lugar de "adoptado".

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital del Frente del País Solidario.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: pediría a la comisión que el inciso a) se modi-

fique cuando dice "El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación". Esto puede ser a los sesenta días o a los dos o tres.

Ayer, justamente, estábamos diciendo que es muy apresurado dar por firme la decisión de una madre de entregar a su hijo antes de por lo menos los cuarenta y cinco días. Cualquiera mujer en la etapa del puerperio vive una situación especial y luego se puede arrepentir. Entonces sugiero poner un mínimo de cuarenta y cinco días, es decir que no se pueda dar el consentimiento antes de los cuarenta y cinco días, y después dar un plazo más amplio, que no tengo problemas en aceptar el que se determine. Pero repito que antes de los cuarenta y cinco días no se debe dar el consentimiento.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer alusión a los pedidos de reformas solicitados por el señor senador por La Rioja.

Cuando se habla de citar y de citación, queremos guardar un orden en la técnica jurídica. Voy a adelantar que voy a aceptar la propuesta del señor senador Menem en cuanto al consentimiento. Pero es bueno aclarar y reiterar este punto: guardan un orden en la técnica jurídica y, sobre todo, ello estaba destinado a los casos en que existía un abandono. Sabemos, como es de público conocimiento, y hay muy buenos ejemplos, que hay niños que han sido abandonados en baldíos; incluso en una bolsa y en una caja.

No hay necesidad de consentimiento cuando hay un manifiesto y continuo desamparo. El que hizo abandono de ese tipo es porque realmente de ninguna forma lo quiere proteger y ha puesto en situación de desamparo al niño. Esta era la orientación de la no citación.

Es cierto lo que dice el señor senador Menem de que hay jurisprudencia donde ha sido declarada la nulidad de la adopción en ese sentido.

Sería bueno aceptar el tema del consentimiento.

Con relación a la modificación propuesta respecto de la palabra "progenitores", dejo sentado que no la acepto. Vamos a dejar esa palabra porque, si continuamos leyendo el inciso a) del artículo en consideración, veremos que más adelante —el siguiente párrafo de ese inciso— menciona la palabra "padres". Es decir, queremos evitar una incongruencia, porque cuando hablamos de "padres" es posible diferenciar

entre el biológico y el adoptivo. Y en este caso hacemos referencia al padre biológico. Por eso hablamos de "progenitores" y entendemos que es bueno marcar la diferencia.

En cuanto a la propuesta formulada con respecto al inciso b), es decir, reemplazar la palabra "adoptado" por la de "adoptando", creo que es correcta.

Las consideraciones que hasta aquí he vertido se refieren a los planteos formulados por el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.

En cuanto a la modificación propuesta por la señora senadora Fernández Meijide, si bien es cierto que en el estado puerperal la mujer puede tener desequilibrios o estar inducida a error en cuanto a la entrega de su hijo, de acuerdo con la técnica moderna de adopción generalmente todo el proceso se hace durante el embarazo, no después del alumbramiento. En este sentido, se trata de lograr un buen apoyo psicológico. Por eso, a lo que apuntan los que entienden y asisten al juez en este aspecto es a inducir al buen tratamiento de la madre en el aspecto psicológico durante el embarazo, no después del alumbramiento.

Entonces, en la situación planteada por la señora senadora por la Capital Federal, ¿en qué estado queda el niño desde el alumbramiento hasta que se cumplen los cuarenta y cinco días?

Evidentemente, el juez siempre va a tender a preferir a los padres biológicos, a tratar de que en ese ambiente el niño crezca. Pero si justamente hay intención de dar en adopción, es porque no existe la capacidad suficiente para ello y hay un estado de desamparo. Esta es mi gran duda con respecto al planteo formulado por la señora senadora Fernández Meijide.

Por lo expuesto, no vamos a aceptar el pedido que efectuara en ese sentido.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sr. Fernández Meijide. — Señor presidente: me alegro de que esta discusión se desarrolle sin ningún ingrediente político. Es muy bueno porque todos estamos discutiendo en favor del mejor interés de los defendidos.

Pero quiero señalar —y agradecería que se tomara en cuenta— que hay abundante legislación europea que sigue sosteniendo el tema del puerperio. También es cierto que puede ocurrir que la entrega de un bebé se siga durante el embarazo. ¿Pero si no es así? Es decir, ¿si ocurre después que nació, a los dos o tres días?

Supongamos que se hubiera identificado a la madre de uno de los bebés que se encontraron últimamente en bolsas, porque fue una vecina quien lo tiró y la gente la vio. En ese caso, no hubo posibilidad de seguimiento durante el embarazo; estamos ante un bebé que nació y con respecto al cual hay que intentar que la madre reconstruya el lazo. Por esa misma razón la ley dice —y bien— “dentro de los sesenta días”.

Ahora bien, puede ocurrir que se tomen los sesenta días y estar en la misma situación, de manera tal que la pregunta será la misma: ¿qué pasa con el bebé? Va a estar igual los sesenta días. Entonces, fijar el límite de los cuarenta y cinco días es garantizar al máximo —y con todo respeto insisto en que se contemple— que no se destruya irreparablemente el vínculo, si es posible todavía repararlo.

Por eso insisto en que se establezcan como límite los cuarenta y cinco días.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Creo que le asiste razón a la señora senadora por la Capital. Sabemos que el estado puerperal no es una situación de libre determinación, y justamente está contemplado en el Código Penal precisamente para atenuar un delito. Por lo tanto, creo que tendría que establecerse un plazo mínimo de cuarenta y cinco días a los efectos de requerir el consentimiento, porque de lo contrario esa manifestación de voluntad no tendrá mucha importancia.

Con respecto a la segunda parte, que modificó el señor miembro informante, quiero dejar en claro —dado que la versión taquigráfica sirve para la interpretación de las leyes por parte de los jueces— que si bien ahora la redacción es correcta en el sentido de que no se requerirá el consentimiento, la citación no debe ser óbice para continuar con el trámite de adopción. Es decir, esa citación debe tener por objeto resguardar el proceso adoptivo, pero no debe ser una traba para su continuación, y el juez debe poder determinar, con una simple citación y respetando el tiempo prudencial, que debe ser mínimo, que continúe la adopción, resolviendo simplemente que no es necesario el consentimiento.

La citación, reitero, debe dar mayor seguridad al proceso pero no debe constituir un impedimento para continuar con la adopción.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicia-

Sr. Menem. — Ya ha manifestado el señor miembro informante que no acepta lo propuesto por la señora senadora por la Capital. Pero para darle tranquilidad, le quiero decir que de todos modos creo que el juez está en perfectas condiciones de determinar el estado en que se encuentra la madre.

Así como muy bien se ha dicho...

—Varios señores senadores dialogan.

Sr. Menem. — Es imposible trabajar así, señor presidente.

Sr. Presidente (Moreau). — Ruego a los señores senadores que respeten al orador.

Continúe, señor senador.

Sr. Menem. — Decía que, como muy bien lo ha señalado el señor senador por San Luis, en los casos penales, el juez determina o no, en virtud de ese estado, un grado de atenuación de la pena. Y esa misma evaluación la va a hacer el juez de la guarda para determinar si la madre se encuentra en condiciones de prestar su consentimiento o no. Digo esto para darle tranquilidad a la señora senadora en el sentido de que el juez va a evaluar correctamente la situación, y podrá decidir si le requiere el consentimiento en ese momento, o a los diez, a los cuarenta y cinco o a los sesenta días.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Simplemente quiero expresar que, en materia penal, el plazo del estado puerperal tampoco está decidido jurisprudencialmente. Algunos entienden que tiene un plazo de treinta días, mientras que otros concuerdan con la opinión del senador. Es decir que, de todas formas, ese inconveniente puede subsistir.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Agradezco la intención de tranquilizarme, pero debo decir que no sé cuántos jueces conocen de psicología, de puerperio y de medicina.

Este fue un tema de mucha importancia al momento de considerarse la ley anterior, por lo cual solicito que no se lo deje librado a la discrecionalidad del juez y que se establezca algún límite. Con todo respeto debo decir que estoy hablando desde un lugar en donde se estudió mucho esta cuestión y se buscó material para que fuera la gente idónea —y no porque un juez no sea idóneo para juzgar— en psicología quien la determinara. Entonces creo que no debemos

dejarla librada a la discrecionalidad. Como dice el refrán, zapatero a tus zapatos.

Creo que establecer ese límite no perjudica a nadie. Es más, yo creía que ya habíamos llegado a ese entendimiento con anterioridad; veo que me equivoqué. Insisto entonces en que no debemos dejar ningún elemento de carácter discrecional en esta cuestión, que es muy sensible.

Sr. Presidente (Moreau). — Creo que el tema ya ha sido suficientemente debatido.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: no hemos tratado de sorprender en su buena fe a la señora senadora Fernández Meijide. Nosotros hemos analizado profundamente el tema, y yo empecé que de ninguna forma esto iba a perturbar el artículo en cuestión. Pero vemos que, de un artículo simple, se va a convertir en un artículo engorroso con todo lo que le hemos puesto.

Creo que el juez, que es a quien le estamos dando todas las facultades, como bien lo decía el señor senador por La Rioja, va a tomar conocimiento directo. Y el juez tampoco va a tomar ningún tipo de resolución o determinación sin la asistencia de los equipos técnicos. Esto está comprendido en la ley. Y, por supuesto, en todo momento se piensa en el niño.

Pienso que es cierto que, dentro del estado puerperal, puede existir un desequilibrio, o un estado no natural en la persona que alumbró. Pero dejemos que el juez y los equipos técnicos valoren esta situación. Por eso no vamos a aceptar la incorporación de este agregado solicitado por la senadora Fernández Meijide.

Sr. Presidente (Moreau). — Se acepta, entonces, la propuesta del senador Menem y se rechaza la propuesta de la senadora por la Capital.

—Sin observaciones se enuncian los artículos 9º, 10 y 11.

—Se enuncia el artículo 12.

Sr. Agúndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: acá dice que: "En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas"; sería importante que ese juicio de adopción tuviera un procedimiento sumarisimo. Porque, en realidad, debemos tener en cuenta el interés del menor, así como su estabilidad emocional y material. En ninguna parte se trata de cuál es el procedimiento. Por lo

tanto sería importante, si bien esto figura en los códigos de procedimiento, atendiendo al interés del menor, que el procedimiento al que se refiere esta ley de fondo sea sumarisimo, verbal y actuado.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.

Sr. Menem. — Tengo algunas modificaciones que proponer para este artículo 12, que va a ser el artículo 321 del Código Civil.

En el inciso e) del proyecto se menciona el Ministerio de Menores, y debería decir "Ministerio Público de Menores", como ocurre en el inciso b). Esta es una corrección meramente tipográfica.

En el inciso f) se habla de que las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Propongo que se elimine lo de secreto, porque es una expresión innecesaria y, además, es muy difícil hablar de un expediente secreto. Basta con que sea reservado.

Un expediente que se tramita en Tribunales no puede ser secreto en el sentido estricto del término. Sí puede ser reservado. Desde el momento en que puede ser examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados, los peritos intervinientes, los empleados que lo tramitan, que intervienen, ya deja de ser secreto. Por eso creo que debería emplearse exclusivamente la palabra reservado.

En el inciso g), que dice que el juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, pudiendo solamente expedir testimonios de sus constancias, hasta ahí está bien. Pero también dice: "...cuando sean beneficiosas para el menor a juicio del juez o tribunal de la adopción y sean requeridas por otros magistrados". Creo que ahí se cambia un poco el eje de la cuestión, porque puede tratarse de copias requeridas por otro juez, que no sean en beneficio del menor, pero sí en beneficio del interés público, por un tratamiento, por un dato, por una cuestión a dilucidar en otro expediente judicial.

Por eso propongo que en este inciso se exprese lo siguiente: "El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, debiendo solamente expedir testimonios de sus constancias ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar el principio de reserva en protección del interés del menor".

Con esta redacción estamos atendiendo, en primer término, el interés público, que está por arriba del interés del menor. En segunda instancia, estamos resguardando el interés del

menor. En tercer lugar, estamos exigiendo que el pedido de otro juez sea autofundado en el caso que necesite, inclusive para un juicio similar a éste, los autos que se han expedido sobre el juicio de adopción.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: con respecto a la primera sugerencia efectuada por el señor senador por La Rioja, quiero señalar que es cierto que los expedientes no pueden ser secretos. En la actividad legislativa el uso de los expedientes es reservado.

Los expedientes son reservados para las partes. El requisito de que el expediente sea secreto es para el funcionario. De lo contrario, no tienen ningún tipo de sanción si viola el secreto. Esto es para el funcionario que viole el secreto y la reserva de un expediente, sobre todo en un caso tan especial en que están involucrados niños.

Justamente, aquí se trata de tener en cuenta el interés de los niños. Muchas veces, cuando uno va a hacer un trámite en los tribunales escucha en los pasillos que, imprudentemente, los empleados dicen “el adoptado” o “pase el expediente de la adopción”. Entonces, debe haber reserva y cuidado en el tratamiento de estos temas.

Por lo tanto, lo reservado es para las partes y el secreto es para el funcionario que a veces comete esa imprudencia de buena o mala fe. Solamente podrá ser sancionado si, de alguna forma, rompe ese secreto. Ese es el sentido de “reservado y secreto”.

No considero que sea sustancial este tema en este artículo. De manera que no se acepta la propuesta de modificación.

Sí acepto el pedido de cambio en la segunda parte del inciso g) del artículo 12, pero que se agregue a lo manifestado por el señor senador por La Rioja lo siguiente: “y que no sea en perjuicio del menor”. Con este agregado acepto la propuesta que hizo el señor senador Menem.

Sr. Presidente (Moreau). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: el miembro informante no me ha escuchado bien cómo quedaría redactada la norma. La propuesta es la siguiente: “El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, debiendo solamente expedir testimonio de sus constancias ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará

obligado a respetar el principio de reserva en protección del interés del menor”.

Sr. Branda. — No había escuchado la última parte.

Sr. Presidente (Moreau). — Entonces, ¿la comisión acepta la propuesta con esa aclaración?

Sr. Branda. — Sí, señor presidente. Pido que se eleve copia de esa modificación a Secretaría para que sea leído cómo quedaría redactada la segunda parte del inciso g).

Entonces la primera parte del inciso g) del artículo 12 no se modifica. O sea, dice así: El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, debiendo solamente expedir testimonio de sus constancias, y sigue tal como fue propuesto por el señor senador por La Rioja.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Salta del Partido Renovador.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: tal cual lo fundé en la discusión en general, y coincidiendo también con el dictamen en disidencia del señor senador por Salta del Partido Justicialista San Millán, propongo un agregado al final del inciso d) que diga: “Tendrán preferencia para el otorgamiento de la adopción los matrimonios legalmente constituidos y en su defecto, las uniones de hecho que acrediten una convivencia continuada no menor de los cinco años a la fecha de solicitud de la adopción”.

Con esto no se pretende discriminar en contra de los solteros pero sí tener en cuenta, dentro del espíritu de la ley, que para la formación del niño se necesita la figura del padre y de la madre. El hecho de que en la realidad a veces no exista —porque muere o se separa el padre o la madre— no es algo querido. Pero determinar a priori que un niño crezca sin la figura de uno de los padres —adoptivos en este caso— no me parece conveniente.

De manera que, dentro del espíritu de defender los intereses del niño, voy a proponer simplemente que se dé prioridad a los matrimonios legalmente constituidos o a las uniones de hecho con estabilidad de cinco años, en un texto como el que he leído.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — No vamos a aceptar modificación en ese inciso.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: en cuanto al inciso h) del artículo 12, voy a insistir en una

propuesta que hice cuando el señor senador por La Rioja se refería a este artículo.

Esta obligación que se establece de que el adoptante debe hacer conocer la realidad biológica al adoptado, tal como está expresada me parece que roza la intimidad de la pareja de adoptantes.

En razón de esto voy a proponer —y lo hago en función de una experiencia personal y familiar que he vivido al respecto— que esta obligación o compromiso quede supeditado a un párrafo que se agregaría al inciso *h*) que diría que: “Este compromiso se asumirá según oportunidad y modalidades que en el ejercicio de la patria potestad el adoptante determine”.

Con esto, la intención que se procura es flexibilizar el compromiso ya que estamos hablando de un acto que tiene un grado de intimidad muy grande como es determinar cuándo los padres deberán hacer conocer al adoptado su realidad biológica.

Textualmente, tal como está redactado el artículo, parecería que se trata de un compromiso perentorio, inmediato. Considero que se preservaría esa intimidad en una situación tan viva y difícil como la mencionada si se agregase este párrafo final que someto a consideración del señor miembro informante.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: con respecto al inciso *h*) del artículo 12 repito que estamos dando cumplimiento a los artículos 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este es un derecho pero, para tranquilidad del señor senador, si lee el inciso tal como está redactado, verá que dice: “Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica”.

No hay una sanción si no cumple. Creo que queda realmente a criterio del padre el momento en que le hará conocer su condición de adoptado.

Si bien no existe sanción alguna para el caso en que no lo haga, sí está comprometido judicialmente para el día de mañana, toda vez que los derechos internacionales del niño han sido reconocidos constitucionalmente en la Reforma de 1994. Lo que estamos haciendo con esto es bajar al nivel de una ley un derecho internacional reconocido constitucionalmente.

Sr. Cafiero. — ¿Me permite, señor presi-

Sr. Presidente (Moreau). — Para referirse a la cuestión que se está considerando tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: si bien es cierto lo que dice el señor senador por Formosa, me permito, sin embargo, insistir en mi propuesta. Si una aclaración en este sentido fuese pertinente no debería interpretarse que esta obligación, este compromiso del adoptante es de ejecución relativamente inmediata. Puede darse el caso de que un tercero en conocimiento de esta prescripción legal pida, exija o sostenga que el adoptante debe hacer conocer inmediatamente la realidad biológica del adoptado, lo cual crearía un conflicto en el seno de la familia. En efecto, son los padres, los adoptantes, quienes deben elegir el momento oportuno en que van a hacer conocer esta situación al adoptado.

Si dejamos librada esta cuestión a esta frase que dice: “según oportunidad y modalidades que en el ejercicio de la patria potestad el adoptante determine”, queda de una manera mucho más expresa la laxitud que tiene esta norma en cuanto a tiempo y momento oportuno.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: quiero hacer una breve aclaración.

Tal como he expresado anteriormente, este artículo —en el cual no se prevé ningún tipo de sanción, ni es facultativo en cuanto al momento— juega con el artículo 19 en el que se establece el derecho que tiene el adoptado para conocer su realidad biológica. Como dije antes, se trata de un derecho internacional del niño.

Ningún padre, con la necesidad de dar amor a un hijo adoptado, va a tomar una determinación que no sea para facilitar la salud mental del niño. Ellos son los que de alguna forma van a determinar el lugar y el momento de comunicar la verdadera situación al hijo. Creo que esto debe constar en algún lado y por eso lo hemos hecho de esta forma.

Por lo expuesto, no vamos a aceptar la propuesta del señor senador por la provincia de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: hablando de este tema, creo que el miembro informante tiene razón con respecto al inciso *h*), habida cuenta de que al no preverse una sanción para esa conducta, el compromiso pasaría a ser de tipo moral.

Yo también quería relacionar el inciso en consideración con el artículo 19, en el cual vamos a tener contradicciones, porque según el artículo 12, inciso *h*), esta situación es facultativa en cuanto al tiempo y según el 19, no, toda vez que se establece una edad.

Voy a apoyar esto, porque tiene que ver con lo que pienso respecto del artículo 19, es decir que debería ser facultativo por parte del adoptante.

El miembro informante no me ha contestado nada al respecto de que el juicio de adopción debería ser sumarísimo, verbal y actuado. Si bien es cierto que el registro es un tema de procedimiento, lo vamos a considerar en este proyecto. Entonces, por analogía, pido que me diga por qué no se puede tratar aquéllo también.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: este mismo tema está en la provincia de Buenos Aires y la experiencia indica que no es de carácter sumario.

La adopción tiene una forma y un tiempo de producirse. Si la ceñimos exclusivamente en tiempos, tal vez, se puedan cometer errores que el proyecto quiere evitar. Es decir, se produce un daño al niño y no se da el ensamble entre padre adoptante e hijo adoptado.

Es por estas razones que no vamos a aceptar el carácter sumario de este procedimiento.

Sr. Secretario (Piuze). — Perdón, señor presidente, ¿en el inciso *e*) del artículo 12 se supone que la palabra “público” está aceptada?

Sr. Branda. — Sí.

Sr. Presidente (Moreau). — Sí, ya lo habían aclarado.

— Se enuncia el artículo 13.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: como el artículo 13 es el último del primer capítulo y como no hay ninguna modificación o sugerencia, voy a solicitar que se pase a votar el Capítulo I, teniendo en cuenta el debate que se ha realizado, las inserciones con él vinculadas y las modificaciones que la Comisión ha aceptado.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Quiero hacer una aclaración.

En la modificación que propuse al artículo 8° respecto al consentimiento, se me hace la observación correcta de que es más preciso que en

lugar de decir “No se requerirá el consentimiento” se lea “No será necesario el consentimiento”.

Sr. Presidente (Moreau). — Así queda registrado, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Señor presidente: quisiera que por Secretaría se leyera la redacción final del artículo 5° del dictamen.

Sr. Presidente (Moreau). — Señor senador: esta Presidencia iba a solicitar al señor senador miembro informante y al señor senador por La Rioja, que fue quien hizo las proposiciones, que al momento de votar —habida cuenta de que reiniciamos esta sesión con número escaso de senadores porque no hacía falta quórum—, vuelvan a hacer referencia a las inserciones o modificaciones del capítulo que se somete a votación.

Creo que esta metodología aclarará la duda que tiene el señor senador por Córdoba y, probablemente, las de otros señores senadores.

Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: como ayer se había quedado en que se insertarían las exposiciones de algunos señores senadores, solicito que se voten en este momento.

Sr. Presidente (Moreau). — Las inserciones del debate general se votaron ayer antes de pasar a cuarto intermedio.

Sra. Rivas. — Quedaron en recogerlas y no se hizo.

Sr. Presidente (Moreau). — Las inserciones se votaron, señora senadora. Si tiene algo para insertar, por favor acérquelo a Secretaría.

Sra. Rivas. — De acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: quiero aclarar la inquietud sobre el artículo 5° que tiene el señor senador por Córdoba de la Unión Cívica Radical.

Al comienzo del debate en particular el señor senador por La Rioja solicitó que el artículo 5° pasara a ser el artículo 2° de una propuesta de ordenamiento que formuló en su exposición de la discusión en general y que la Comisión ha aceptado. Es decir que se inserte en el Código Civil, en primer lugar, todo lo que hasta el momento ha sido leído y manifestado en el debate en particular, y el artículo 5° pase a ser el ar-

tículo 2º del proyecto. O sea que el artículo 5º no fue tratado ni será votado hasta que sea considerada la totalidad del proyecto.

Sr. Storani. — Gracias, señor senador.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Simplemente, quiero aclarar que el capítulo que se está por votar contiene los artículos 311 a 321 del Código Civil en forma correlativa con la numeración del dictamen con excepción del artículo 5º, que pasaría a ser 2º del proyecto.

Sr. Presidente (Moreau). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo I con las aclaraciones efectuadas, con las inserciones propuestas y con las modificaciones aceptadas por la Comisión.

Sr. Agúndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Se está sometiendo a votación, señor senador.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: sólo quiero aclarar que la votación de nuestro bloque será por la afirmativa, pero con las diferencias que hemos planteado.

Sr. Presidente (Moreau). — Así se entiende, señor senador.

Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Moreau). — Queda aprobado por unanimidad el Capítulo I e inserciones.

— En consideración el Capítulo II.

— Se enuncia el artículo 14.

Sr. Agúndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: quiero hacer una propuesta a efectos de mejorar su redacción.

El artículo 14 dice: "La adopción plena, es irrevocable...". Yo propondría el siguiente texto: "La adopción plena que se constituye desde que quede firme la resolución que la decreta, es irrevocable...". De lo contrario, una adopción en situación de apelación por el ministerio público, no es adopción.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: este artículo juega con el artículo 2º, del dictamen que sería el 312 del Código Civil. Si el señor senador lo analiza detenidamente verá que es así.

Entonces, la Comisión no va a aceptar ninguna modificación al respecto.

Sr. Presidente (Moreau). — La comisión no acepta la modificación propuesta.

— Se enuncia el artículo 15.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: yo sé que el señor miembro informante recién aplicó el dicho: "lo que abunda no daña". Pero advierto que la primera parte del artículo 15 dice: "Podrá ser adoptante por adopción plena toda persona que reúna los requisitos establecidos en las disposiciones de la presente ley y no se encuentre comprendida en sus impedimentos".

Esta expresión general ya está contenida en el artículo 6º del dictamen, artículo 315 de la nueva numeración. Es una disposición de carácter general donde se establece: "Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta ley...".

En consecuencia, me parece que es una repetición innecesaria por más que se diga que lo que abunda no daña; cuando se trate la adopción plena no tiene por qué repetirse lo mismo que está dicho en las disposiciones generales, que establecen como pauta general quiénes pueden ser adoptantes, o sea, quienes reúnen los requisitos de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Por eso propondría que se suprima la primera parte del artículo y que comience directamente refiriéndose a la guarda del menor; o sea, con la segunda parte.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Es cierto que hoy utilicé la expresión jurídica de que en derecho lo que abunda no daña.

Pero cabría reflexionar respecto de esto pues si miramos el artículo 16 veremos que allí se hace una enumeración taxativa.

Es cierto que en la parte general existe una definición de lo que es la adopción en general...

Sr. Menem. — Yo me refiero al artículo 15.

Sr. Presidente (Moreau). — Nos estamos refiriendo al artículo 15, señor miembro informante.

Sr. Branda. — Ya lo sé; lo que ocurre es que hago jugar los dos artículos.

Pero, igualmente vamos a aceptar la sugerencia de modificación del artículo 15.

Sólo quería destacar que ambos artículos juegan entre sí.

Sr. Presidente (Moreau). — Entonces, la Comisión acepta la modificación propuesta al artículo 15.

—Se enuncia el artículo 16.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Aquí simplemente voy a proponer una modificación respecto de la numeración de los artículos. Donde dice "artículos 7° y 8°", debe leerse "artículos 316 y 317".

Sr. Branda. — La Comisión acepta la propuesta, señor presidente.

—Se enuncia el artículo 17.

Sr. Presidente (Moreau). — No se formulan observaciones.

—Se enuncia el artículo 18.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.

Sr. Menem. — En este caso, donde dice "artículo 14" debe leerse "artículo 323".

Sr. Branda. — La Comisión acepta la propuesta.

—Se enuncia el artículo 19.

Sr. Cafiero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Propongo que la edad que se fija en el artículo en consideración sea de 18 en lugar de 16 años.

Sr. Branda. — La Comisión acepta la propuesta, señor presidente.

Sr. Presidente (Moreau). — La propuesta ha sido aceptada por la Comisión.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: como lo señalamos con referencia al inciso *h*) del artículo 12, creo que el texto del artículo 19 debería ser el siguiente: "El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción."

Entiendo que el texto propuesto es más que suficiente, porque existe la Convención de los Derechos del Niño que contempla este tema.

La determinación de una edad o de un límite no es el criterio usado en el inciso *h*) del artículo 12.

Por lo tanto, con referencia a la identidad de una persona, ese es el derecho que tiene; por eso considero que lo tiene a los 16 o a los 18 años y que no debe establecerse una edad determinada.

De lo contrario, no se cumpliría con lo dictaminado por la Convención de los Derechos del Niño.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: hemos aceptado elevar la edad por un problema de maduración.

Si leemos detenidamente el inciso *h*) del artículo 12 que hemos discutido y que se correlaciona con éste, veremos que está referido a los padres.

Creo que los padres están en condiciones, porque poseen la maduración suficiente y están en su plenitud psíquica y física, de determinar cuál será el momento oportuno para develar al chico su condición de adoptado.

Acá nos referimos al derecho del niño de poder acceder al expediente a partir de una edad determinada.

Nuestro Código Civil faculta a las personas de 16 años de edad a hacer algunas cosas, pero los 18 años constituyen una edad que también está estipulada en el Código Civil y que concordaría plenamente con lo dispuesto por el artículo 19 o sea la posibilidad de la persona de acceder al expediente a partir de los 18 años.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Si se fija en el artículo 19 la edad de 18 años parecería que el inciso *h*) del artículo 12 ya no tendría ningún efecto. Si el chico cumple 18 años y no accede al expediente, no existiría la obligación o el compromiso moral dispuesto por el referido inciso *h*) del artículo 12.

Por lo expuesto considero que la cuestión es contradictoria y simplemente quiero dejarla así establecida, señor presidente.

Sr. Branda. — No vamos a aceptar la propuesta por las razones anteriormente expuestas.

Sr. Presidente (Moreau). — Se va a votar el capítulo II, artículos 14 a 19, con las modificaciones aceptadas por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Moreau). — Aprobado por unanimidad.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Simplemente, deseo aclarar que el capítulo que acabamos de aprobar corresponde a los artículos 323 a 328 del Código Civil y el que habremos de considerar a continuación, arranca a partir del artículo 329.

Sr. Presidente (Moreau). — Se toma nota, señor senador.

En consideración el capítulo III.

—Se enuncia el artículo 20.

Sr. Presidente (Moreau). — No se formulan observaciones.

—Se enuncia el artículo 21.

Sr. Presidente (Moreau). — No se formulan observaciones.

—Se enuncia el artículo 22.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.

Sr. Menem. — Voy a someter la próxima modificación al buen criterio del señor miembro informante. No sé si es más preciso hablar de “vínculo biológico” antes que de “vínculo de sangre”. Me parece que la primera es una expresión más moderna.

Propongo que se la incluya en el artículo 22, en reemplazo de “vínculo de sangre”, donde dice: “Los derechos y deberes que resulten del vínculo de sangre...”.

Me adelanto al artículo 27, donde dice: “...reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre...”. Creo que cuando se habla de “padres” se hace referencia a los padres biológicos. Pero esta expresión no haría falta, ya que sería una redundancia; basta con decir “padres”.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: acepto las modificaciones; considero que son atinadas.

Sr. Presidente (Moreau). — Entonces ¿cómo quedaría redactado el artículo 22?

Sr. Menem. — El artículo 22, que sería el 331 del Código Civil, quedaría redactado de la siguiente forma: “Los derechos y deberes que re-

sulten del vínculo biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción...”, etcétera.

Sr. Branda. — Se reemplazaría “vínculo de sangre” por “vínculo biológico”. Aceptado.

—Se enuncian los artículos 23 a 26.

—Se enuncia el artículo 27.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Acepto la modificación sugerida por el señor senador por La Rioja; donde dice: “...el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre...”, debe leerse “...reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos”. O sea que se elimina “de sangre”.

Sr. Presidente (Moreau). — Por lo tanto, la Comisión acepta la modificación sugerida.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — En el artículo 27, donde se lee “artículo 22”, debe decir “artículo 331”.

Sr. Branda. — La Comisión acepta la modificación porque es una cuestión de ordenamiento.

Sr. Presidente (Moreau). — Se toma nota.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo III con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Moreau). — Queda aprobado por unanimidad.

En consideración el capítulo IV.

—Se enuncia el artículo 28.

Sra. Fernández Meijide. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: quiero referirme al apartado c) del inciso 1. Objeto el segundo párrafo, que dice: “El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor”.

Mi objeción no está referida al contenido. Sé que me van a decir —y tienen razón— que es uno de los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo que pasa es que el lugar en donde está este texto, y teniendo en cuenta el párrafo que lo precede, nos lleva a una discusión en la que nos vimos inmersos durante todos estos últimos años, cuando empe-

zaron a rescatarse los chiquitos entregados durante la dictadura.

Recordemos que había quienes sostenían que en una adopción hecha a partir de un delito —como había sido el robo del menor y entrega—, el interés superior del menor era no enterarse o seguir con el adoptante. Sobre todo, cuando la situación se veía agravada en los casos en que el adoptante, entre comillas, había sido una persona que había participado en la represión.

Para ser concretos, sugiero a la Comisión que no se incluya este texto en este inciso del artículo que estamos considerando. Recuerden el caso de Juliana y muchos otros más, que sirvieron de doloroso espectáculo, en los que se discutía si para proteger el derecho superior del niño había que dejarlo con su secuestrador o con el ladrón del menor.

Sr. Presidente (Moreau). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: ésta es una modificación que introdujo la comisión al proyecto, respecto de la cual hemos debatido largamente. Sé que no es un tema fácil. Hemos decidido la incorporación del párrafo justamente a raíz de lo que manifestó la señora senadora.

Hay casos que evidentemente fueron de resonancia en la opinión pública, en los cuales siempre veíamos la pelea entre los padres adoptantes y los biológicos sin interesarles el interés superior del niño.

Incluimos el párrafo en el inciso c) del punto 1 del artículo 28 para determinar que es el juez quien debe hacer la valoración.

Creo que en su momento los jueces fueron justos y decidieron lo que tenían que hacer, pero los niños nunca fueron escuchados. Entonces, una buena forma de que el juez tenga una valoración del tema es escuchando a los niños; así se resguarda el valor superior: el menor.

Ese es el motivo por el cual incluimos este párrafo, sin entrar en una discusión sobre qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo equitativo y lo inequitativo.

Concretamente, lo que quisimos hacer con la introducción de este párrafo es que el juez, por el principio de inmediación, tome conocimiento directo del tema en todos los casos y lo valore.

Vemos que en el artículo en consideración se trata del caso de la adopción nula, y que la guarda quedaría vigente.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Antonio

Sr. Branda. — Por estas razones, mantenemos la redacción del párrafo aludido. Lo digo con todo respeto porque sé lo que han trabajado las organizaciones de derechos humanos para el encuentro de niños desaparecidos.

Entonces, con todo respeto digo que no vamos a aceptar el pedido de modificación planteado por la señora senadora por la Capital Federal.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: quiero hacer una observación.

El avance en la investigación de identidad y de filiación a través del ADN hace que ese método hoy sea utilizado no sólo para los casos de búsqueda de niños sino también para otros supuestos. Es decir, la ciencia sirvió para otros casos. Los temas de hoy —esperemos que lo otro no se repita— son el robo con fines de prostitución, el tráfico de niños e incluso la venta en el exterior y, a veces, hasta el tráfico de órganos, lo que es tan horrible que hasta cuesta pensarlo.

Se trata de otro tipo de delito, pero allí también se podría aducir el interés del menor porque ha estado con las personas mucho tiempo. Es decir que en lugar de valorizar si el delito es aberrante o no, lo que se mide es la edad, que va a cambiar porque el niño va a crecer y se convertirá en adulto. Entonces, no valoricemos el problema en el momento como si fuese una foto fija, sino el delito previo.

Cuando hay un delito de este tipo es de orden público. No es una cuestión subjetiva del interés superior. El delito hace que el interés superior del chico sea el interés público.

En consecuencia, más allá de lo que fue el pasado, reitero la modificación propuesta. Sé que existe la mejor intención en todos. Jamás sospecharía mala intención. No me siento ofendida. (Que quede claro, por favor).

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del bloque justicialista.

Sr. Menem. — Señor presidente: está claro que la posición del miembro informante fue poner a cubierto los fundados temores que tiene la señora senadora por la Capital. Pero también es cierto que el lugar donde está ubicado este concepto quizá no sea el más adecuado porque se está hablando de las nulidades. Y si se dicta una nulidad, no veo qué tiene que ver con el interés del menor, porque se puede declarar que esto es nulo, cualquiera fuera el interés del menor.

Además el interés superior del menor tiene que estar presente en todos los casos y en todos los procedimientos, y no sólo en las nulidades.

Por ello propondría al señor miembro informante que el párrafo que dice "El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor" vaya como una norma general dentro de las reglas del proceso de los juicios de adopción en el artículo 12; iría como inciso i), es decir, después del inciso h); incluiríamos este párrafo, sacándolo así del tema de las nulidades.

Personalmente creo que no tiene mucho que ver con el tema de las nulidades. Si el juez entiende que tiene que aplicar este principio, lo puede hacer tanto en el caso de las nulidades como en cualquier otro, con lo que tenemos presente la norma de la Convención de los Derechos del Niño.

Sr. Presidente (Cafiero). — ¿Acepta el señor miembro informante esta modificación?

Sr. Branda. — Señor presidente: sé que todas las intervenciones y las solicitudes de modificaciones guardan buena intención.

Es cierto que este párrafo no tiene nada que ver con la nulidad y con el delito en sí, porque aquí no se meritúa el delito cuando el menor es tenido en forma ilícita. En este caso, cuando se declare nula la adopción la guarda queda vigente. Ese artículo juega de esa manera.

Pero para que no se preste realmente a confusión voy a aceptar la modificación propuesta. En ese caso habría que pedir una reconsideración del artículo correspondiente y agregar como inciso i) el que ha propuesto el señor senador por La Rioja.

De esta manera quedarían conjugados todos los intereses. Ha sido intención de esta Comisión no pretender tener la verdad. Se trata de un tema caro a los sentimientos y de mucha sensibilidad. La idea ha sido trabajar todos en conjunto.

Esta situación que estamos viviendo en el recinto es para llegar a una mejor ley por el bien de los niños.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: para hacer viable la propuesta pido la reconsideración del artículo 12, que se aprobó bajo el número 321.

Sr. Presidente (Cafiero). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador por La Rioja.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La Presidencia aclara que se requieren dos tercios de los votos.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — En consideración nuevamente el artículo 12.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: propongo que en el artículo 12 se agregue un inciso i) a continuación del h) que diga: "El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor".

Sr. Presidente (Cafiero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12, con la modificación formulada por el señor senador por La Rioja.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — Ha resultado aprobado por unanimidad.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: ya está aclarado que se ha suprimido este párrafo del inciso c), punto 1 del artículo 28 y que ha pasado al artículo 12.

El artículo 28 dice al comienzo: "Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil..." Como lo estamos incorporando al Código Civil el texto debería decir "...de este Código" en lugar "del Código Civil".

Sr. Branda. — Para una mejor técnica legislativa acepto la propuesta formulada.

— Sin observaciones, se enuncia el artículo 29.

Sr. Presidente (Cafiero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV, que contiene los artículos 28 y 29, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — Queda aprobado por unanimidad.

En consideración el Capítulo V.

— Se enuncian los artículos 30 y 31.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.

Sr. Menem. — Señor presidente: para dotar a la institución de la seriedad que corresponde,

creo que tendríamos que establecer otros resguardos cuando se trata de que una adopción concedida en el extranjero se transforme en un régimen de adopción plena, que es similar a la filiación biológica. Por eso, creo que hay que fijar algunos resguardos.

En consecuencia, propongo la siguiente redacción del artículo 31: "La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos establecidos en este Código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado". Es decir, tendrían que intervenir ambos para convertir aquí en plena una adopción concedida en el extranjero.

A continuación propongo agregar el siguiente párrafo: "Si este último (o sea, el adoptado) fuese menor de edad deberá intervenir el Ministerio Público de Menores". Creo que de esta forma damos el debido resguardo al instituto, porque estamos convirtiendo en adopción plena a una adopción concedida en el extranjero, que puede no tener los mismos requisitos que nosotros exigimos en este Código. Así que exigimos lo mínimo: que se acredite el vínculo y se preste la conformidad de adoptante y adoptado. Y si éste es menor, que intervenga el Ministerio Público de Menores.

Este aspecto también ha sido consultado con los más autorizados juristas en la materia, quienes me han hecho la sugerencia que he formulado.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Branda. — Señor presidente: creo que es atinado el pedido de reforma formulado con respecto al artículo 31. Si bien no me había quedado claro al principio lo relacionado con el caso de los menores, luego —al final— se ha aclarado que va a participar en ese caso el Ministerio Público respectivo.

En consecuencia, aceptamos las modificaciones propuestas por el señor senador por La Rioja, ya que con ellas quedan a resguardo las adopciones que se hacen en el extranjero.

Sr. Presidente (Cafiero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo V, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — Queda aprobado el Capítulo V por unanimidad.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: en cuanto a los capítulos I, II y III se dejó aclarado a qué artículos del Código Civil correspondían. Creo que no lo hemos hecho en el caso de los capítulos IV y V. Quizás convendría dejar constancia de esa circunstancia.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: los artículos 28 y 29 del Capítulo IV serían los artículos 337 y 338 del Código Civil, mientras que los artículos 30 y 31, pertenecientes al Capítulo V, serían los artículos 339 y 340 del citado Código.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: cabe aclarar que al principio de mi informe en particular había adelantado también esa circunstancia, que es redundante, pero en derecho lo que abunda no daña.

Así que de esa forma quedaría conjugado este artículo 1º, es decir, de acuerdo con lo propuesto por el señor senador por La Rioja, haciéndose la inserción dentro del Código Civil en la forma por él solicitada.

Ahora pasaríamos a considerar el artículo 2º, que sería el artículo 5º del proyecto que estamos tratando.

Sr. Presidente (Cafiero). — No, falta el Capítulo VI, señor senador.

Sr. Menem. — No. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: al comienzo de esta sesión dijimos claramente —algunos señores senadores no estaban presentes— que el artículo 1º contiene las incorporaciones que hacemos al Código Civil, que en este caso van de los artículos 311 al 340. Ese artículo ya está concluido.

Dijimos también que como artículo 2º del proyecto —ya no del Código Civil, porque la incorporación a dicho ordenamiento ya está efectuada— tenemos que tratar el artículo 5º del dictamen, que contiene la cuestión del registro, que tanto preocupa a los señores senadores.

Dado que se ha aceptado este criterio, lo que tendría que hacer la Presidencia —y respetuosamente lo sugiero— es poner en consideración el artículo 2º del proyecto, que contendría el ar-

título 5º del dictamen, que se refiere al registro. No sé si está claro.

Sr. Presidente (Cafiero). — Está clarísimo, señor senador.

En consecuencia, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (*Lee*) “A los fines de esta ley, las autoridades de aplicación organizarán en el orden nacional y provincial, un Registro Unico de Aspirantes a la Adopción, cuyo funcionamiento se coordinará mediante convenios.”

Sr. Presidente (Cafiero). — En consideración. Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Cabana. — Señor presidente: voy a adherir a esta propuesta porque la Comisión de Familia y Minoridad había resuelto que se proponga esa modificación del artículo 5º. De manera que estamos totalmente de acuerdo con lo que ha propuesto el senador Eduardo Menem.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: antes de reanudar la sesión algunos señores senadores hemos estado conversando y debo decir que existen divergencias de opinión muy serias con respecto a este tema. En consecuencia, solicito un cuarto intermedio en las bancas para tratar de lograr una solución y evitar así discusiones. De lo contrario, discutiremos la cuestión.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: hemos debatido largamente este tema en nuestro bloque, y considero que hemos sido lo suficientemente amplios.

Este proyecto contiene tres aspectos importantes: el primero son los cinco años de residencia como requisito para la adopción; el segundo es justamente esta cuestión, que trajo muchos conflictos para llegar al articulado que estamos proponiendo, y el tercer aspecto importante es la eliminación del acto administrativo para otorgar la tenencia y el acto que se hace por medio de escribano público. Son tres cuestiones que, evidentemente, constituyen el tema central de este proyecto.

Hemos aceptado modificaciones sobre la redacción del artículo que originalmente estaba prevista y, de alguna forma, considero que hemos congeniado todas las inquietudes. Cada provincia se va a dar su propia organización en un sentido amplio, y lo mismo hará la Nación.

Es necesario organizar el problema de los aspirantes a la adopción porque realmente esto obedece a un ordenamiento público. En efecto, el Estado no puede desentenderse de esta situación; sabemos que existen organizaciones civiles que trabajan muy bien en esta materia tan delicada, y el hecho de que lo sigan haciendo no está escindido de este proyecto. Van a seguir trabajando con los jueces, en forma coordinada y conjunta. Pero sí es necesario dar un ordenamiento para que los niños —pensando solamente en ellos— no sean trasladados de sus lugares o regiones de residencia.

Primero, que tengan prioridad de organización en sus regiones para, luego, en caso de que no haya posibilidades de adopción allí, puedan ser adoptados en otros lugares del país.

Creo que ésa es la intención de este artículo. Entiendo que debemos dar una base organizativa y ése es el objetivo del registro. Esto es para que los jueces tengan algún punto de referencia y puedan dar un ordenamiento serio, transparente y cabal a esta cuestión.

Eso es, señor presidente, lo que perseguimos con este artículo. Creo que es el artículo que más se debatió, el que más se trabajó y que, finalmente, hemos llegado a una posición que abarca el conjunto de las problemáticas planteadas por los distintos partidos.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: yo voy a exponer para que quede constancia de cuáles son las objeciones que me merece el artículo que vamos a considerar. Y quiera Dios que el señor miembro informante me las aclare, que oportunamente avenge mis dudas porque eso quedará como una explicación auténtica.

Con referencia a este artículo 5º, que sigue llamándose registro único, en los fundamentos del proyecto —y esto es sumamente importante— se señala que la finalidad del mismo radica en que todos los aspirantes a adopción tengan las mismas posibilidades, unificándose las solicitudes a nivel nacional.

Asimismo se establece que se respetará indefectiblemente el orden cronológico de la inscripción de los aspirantes, evitando maniobras y dilaciones absolutamente injustas en los trámites de adopción.

Así las cosas, señor presidente, pareciera que el criterio que inspira el artículo 5º del proyecto, interpretado a la luz de estos fundamentos, es el de considerar que hay que seguir un orden cronológico de inscripción en la búsqueda de un

hijo adoptivo, para uno o unos padres adoptantes y para el otorgamiento de la guarda y adopción.

Esto es, señor presidente —y es fundamental—, se pone el centro de la cuestión, la finalidad misma de la institución de adopción en los futuros adoptantes y no en el interés del menor. Yo discrepo con la solución que inspira este artículo, porque en cierta manera se contraponen con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8º y el inciso b) del artículo 12, textos donde el centro de atención de la adopción está puesto en el menor y no en los eventuales adoptantes.

En la adopción no se trata de buscar un hijo a los padres, sino de buscar los mejores padres para el hijo que los necesite. La adopción debe privilegiar el derecho del niño sobre el derecho de los potenciales adoptantes, para darle a ese menor los mejores padres posibles. Porque es una realidad de la vida que hay personas que no están capacitadas para adoptar. Hay otros que lo están en determinadas condiciones. Y hay otras personas que están, incluso, dispuestos a adoptar a un menor discapacitado o enfermo de sida.

También es una realidad que las causas que pueden llevar a una persona o a un matrimonio a pensar en un hijo son múltiples: la falta de hijos, el deseo de tener hijos biológicos que, a veces, llegan después de los de adopción, el deseo de salvar un matrimonio con problemas, el deseo de no quedar solo en la vejez. Todos son deseos legítimos, pero ¿dan derecho a un hijo? ¿Existe un derecho al hijo? Porque el menor no es objeto del derecho, sino sujeto de derechos. El es persona.

No basta, entonces, que una persona quiera adoptar un hijo, sino que tiene que ser capaz de ser adoptante y de serlo en ese caso concreto. Así como los eventuales adoptantes presentan diferentes actitudes, también las presentan los menores a ser dados en adopción.

El camino adecuado no es imponer al juez el imperativo de seguir un orden cronológico de inscripción en un registro para otorgar la guarda o adopción de un menor, porque puede suceder que esas personas inscriptas en el registro de aspirantes para adopción carezcan completamente de las condiciones morales o psicológicas para ser adoptantes.

Puede ser que las condiciones concretas de ese menor exijan una búsqueda más selectiva e, incluso, difícil de padres adecuados. Por eso en este caso considero que el juez no debe seguir en absoluto el orden cronológico de inscripción en el registro sino que debe decidir discrecional-

mente fijándose en el interés del menor y en su bien, buscando los mejores padres.

Desde el punto de vista de los futuros adoptantes, la adopción no puede ser pensada como un trámite sino como un proceso de vida en el cual se va a formar a una persona y se va a fundar un vínculo entre adoptante y adoptado, que sin ser biológico llega a tener la misma fuerza, vitalidad y afecto.

Por ello, la adopción es una institución a través de la cual, repito, debe tratar de encontrar los mejores padres para el menor que los necesita.

Quisiera agregar en apoyo de esta tesis lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, reiteradamente citada en el curso del debate, que tiene rango constitucional, cuando menciona que los Estados partes que reconocen la adopción cuiden que el interés superior del niño sea la consideración primordial para su concesión.

No obstante la mejora que se ha hecho sobre la redacción originaria, tengo mis fundadas dudas sobre cómo va a funcionar este sistema teniendo en consideración las jurisdicciones provinciales.

Escucharé las explicaciones que nos quiera dar el señor miembro informante, sobre todo frente a ese proceso de selección cronológica, que me parece realmente inaceptable.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Solana. — Señor presidente: solamente quisiera decir unas pocas palabras.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Simplemente quiero expresar que comparto las observaciones sustanciales que ha expresado el señor senador por Corrientes. No deseo agregar otras consideraciones, razón por la cual solicito que mis observaciones sean insertadas en el Diario de Sesiones.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Después de un profundo estudio llevado a cabo por la Comisión de Legislación General de esta Honorable Cámara, nos disponemos hoy a tratar el respectivo despacho referente al tema de la adopción.

Entiendo que de igual manera a que ha sucedido en el respectivo tratamiento en comisión y en el posterior debate en la Cámara de Diputados, se ha procurado

recoger en este proyecto las diversas inquietudes provenientes del ámbito judicial y jurídico, como así también de las agrupaciones políticas representadas en ambas Cámaras.

Estas inquietudes son, a su vez, el reflejo de los reclamos que los sectores de nuestra sociedad particularmente interesados en este tema, vienen formulando desde hace largo tiempo, con relación a las dificultades que origina la aplicación en la práctica de la legislación vigente.

Este desajuste entre la normativa y la realidad ha acarreado muchas veces, el indeseable resultado de frustrar la posibilidad de hombres y mujeres de ser padres y de privar a muchos menores desamparados, del derecho de crecer en el seno de una familia.

Dicha situación, que se contrapone a las finalidades de este instituto nos impone, señor presidente, la necesidad de introducir al sistema que nos rige algunas modificaciones fundamentales que tiendan a agilizar el juicio de adopción. Es necesario además rodearlo de las máximas garantías a fin de satisfacer los intereses de los menores y de quienes quieren adoptar; como así también contemplar la situación de los padres de sangre.

Pero antes de introducirme en las innovaciones que se han incorporado en el dictamen en tratamiento, efectuaré algunas consideraciones previas con relación a esta institución.

Desde la antigüedad, la adopción ha sido uno de los métodos utilizados para asegurar la continuidad de la familia, constituyendo el primer paso de transición desde el primado de orden biológico al afectivo como nexo familiar.

Esta institución de antigua data, que reconoce remotos antecedentes en las civilizaciones de Babilonia, Israel, Grecia y Roma, adquirió notable importancia en nuestro siglo como consecuencia de la elevada orfandad que habían desencadenado las dos guerras mundiales.

Fue en esa época que las legislaciones europeas la perfeccionaron, configurándose con características que se asemejan a las actualmente vigentes.

Por el contrario, en la etapa del derecho francés de la codificación, sus finalidades eran otras, pues se priorizaban los intereses de los adoptantes. Vale decir, que la adopción les permitía a éstos transmitir bajo la forma de un contrato, el nombre y la herencia a otra persona, pero sin crear vínculos familiares con ella.

En lo que respecta al derecho argentino, fue en el año 1948, cuando por primera vez se reguló sobre esta materia. Como es sabido, Vélez Sarsfield no incluyó ninguna norma vinculada con la adopción en el Código Civil.

Tanto la ley 13.252 como la que nos rige en la actualidad, evidentemente no han alcanzado a satisfacer las expectativas creadas frente a este tema.

En efecto, la primera de ellas regló fundamentalmente la adopción simple, que importaba mantener subsistentes los vínculos con la familia biológica.

Posteriormente la ley 19.134 incorporó nuevos preceptos que tampoco resultaron suficientes. Su aplicación nos enfrentó a las grandes dificultades que presentan los

juicios de adopción, en los cuales los valores de la celeridad y economía del trámite resultan muchas veces diluidos.

Es obvio, señor presidente, que estamos frente a un tema delicado y casi siempre conflictivo. En el mismo se conjugan los distintos intereses de las partes involucradas, sus emociones y sentimientos; también sus prejuicios culturales.

En este orden de ideas, cabe observar que si bien en su versión moderna, la familia biológica y la adoptiva son consideradas como familias equivalentes en el aspecto formal, se ha demostrado que la sociedad percibe a esta última como una familia distinta.

Ello se debe a la importancia que el contexto socio-cultural le atribuye a los lazos consanguíneos. De hecho, para los británicos los lazos de sangre eran tan importantes que la adopción no fue aceptada hasta el año 1926.

Al margen de lo expuesto, la adopción se presenta en la actualidad, como una solución óptima para una problemática que merece ser analizada desde una perspectiva integral.

Por un lado, contempla la situación de aquellos que desean ser padres y no pueden serlo.

En este caso, el acto de adoptar nos expresa que los vínculos familiares creados se nutren del afecto más que de la sangre.

Por otro lado, la adopción cumple una función social importantísima de dar padres a niños en diversas situaciones de desamparo.

Sabemos, señor presidente, que estas críticas situaciones concluyen indefectiblemente en la falta de un ambiente familiar adecuado para el crecimiento, educación y desarrollo del menor.

Y es por ello, que considero que debemos priorizar por sobre todas las cosas, el interés de los menores, que son los principales destinatarios de esta ley.

Ello importa, por otra parte, sujetarnos a lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por este Congreso en el año 1990.

De su artículo 21 se desprende un claro lineamiento, que constituye el espíritu que preside toda la Convención: los Estados que reconocen y/o permiten la adopción, cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

Como puede apreciarse, señor presidente, las múltiples facetas que presenta este tema van más allá del plexo normativo que hoy pretendemos delinear.

El transcurso del tiempo y los cambios que se han producido en la sociedad, se han reflejado también en la figura de la adopción.

De allí, que el ordenamiento jurídico tenga que acompañar tales cambios, respondiendo así al desafío que representa regular situaciones nuevas o no previstas.

Considero que el dictamen en tratamiento, apunta a corregir las fallas de que adolece el régimen legal vigente en esta materia y a las que me he referido al iniciar mi exposición.

Entre las principales modificaciones, cabe destacar, la intervención que ahora se le atribuye al juez en el momento mismo de la guarda (artículo 7º), a fin de evitar que sea otorgada por medios distintos al judicial.

En orden al cumplimiento de dicho propósito, se prohíbe expresamente la entrega en guarda mediante escritura pública o acto administrativo (artículo 9°).

Por otra parte, se exige que los progenitores del menor sean citados a prestar su consentimiento, con carácter previo al otorgamiento de la guarda. A excepción, claro está, de los casos de abandono comprobado por la autoridad judicial, privación de la patria potestad y de entrega del menor expresada judicialmente.

Dicho requisito tiende a proteger a los padres biológicos, a la vez que brinda mayor seguridad al proceso de la adopción, que no resultará obstaculizado por los eventuales reclamos que aquéllos puedan formular.

El juez puede acortar el tiempo de la guarda, puesto que el artículo 7° establece un plazo flexible, "no menor de seis meses ni mayor a un año", lo que importa un beneficio para los adoptantes.

A fin de garantizar el derecho de información y de identidad, se consagra que el adoptado a partir de los dieciséis años podrá acceder al expediente judicial para así conocer su realidad biológica (artículo 19). Con el mismo objetivo, en la sentencia judicial debe constar el compromiso del adoptante de revelar al adoptado dicha circunstancia (artículo 12, inciso h).

Según la normativa que se propugna, podrán adoptar las personas que cuenten con treinta años de edad o matrimonios que tengan más de tres años de casados.

En conclusión, señor presidente, considero que los recaudos previstos tienden a simplificar y agilizar el trámite de la adopción. A la vez que se procura un mayor control del mismo, el que es garantizado mediante la intervención del juez y del Ministerio Público de Menores, en su calidad de parte en el proceso.

Como he venido señalando, en esta cuestión gravitan otros factores que no serán modificados con el dictado de esta ley, sino a través de los cambios sociales y culturales que puedan producirse.

No obstante ello, esta iniciativa se orienta a corregir algunas prácticas indeseables que sí pretendemos eliminar, conformando un régimen legal idóneo que permita el desenvolvimiento de esta institución con mayor transparencia y eficacia.

Por las consideraciones expuestas, adelanto mi voto favorable a la iniciativa en tratamiento.

Sr. Presidente (Cafiero). — Si lo resuelve el cuerpo, así se hará.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: evidentemente éste fue el artículo más conflictivo, como dije anteriormente. No es producto de un capricho.

Quisiera ser lo suficientemente claro. En ningún lugar del proyecto de ley dice que es "cronológico"...

Sr. Aguirre Lanari. — Lo dice en los fundamentos.

Sr. Branda. — Está en los fundamentos.

Sr. Presidente (Cafiero). — No dialoguen.

Sr. Branda. — Estoy contestando lo que me pidió el señor senador por Corrientes. Le pediría que no me interrumpa.

Si esa expresión puede llegar a ser fuente de interpretación, pido que se teste de los fundamentos la palabra "cronológico" para que no quede ninguna duda de que la intención de este artículo es organizar en forma debida, seria y transparente el registro de aspirantes a la adopción.

Además, quisiera decir que nadie está obligando a las provincias a nada. Las provincias, en virtud de la Constitución Nacional, se reservan los derechos de organizar sus registros y de organizarse con los poderes no delegados. De ninguna forma la Nación imperativamente puede ordenarles que organicen sus cosas. Los procedimientos y sus registros los organiza cada provincia. Esto está perfectamente instaurado en nuestra Constitución.

La intención —lo repito para que no quede la menor duda— de este artículo es dar una organicidad a los adoptantes y a los adoptados. Porque se han manifestado como ejemplo algunas ideas que suceden dentro de las jurisdicciones provinciales. Puedo dar muchos ejemplos que se han producido, y no quisiera traer conflictos del pasado a la actualidad.

Yo sé que hay personas y organizaciones privadas serias que trabajan sobre este aspecto. Creo que van a poder seguir trabajando y no va a ser este artículo el que les va a impedir hacerlo.

Considero que a partir de este artículo vamos a darle una organicidad a la Nación respecto de un tema del que el Estado no se puede desentender.

No podemos privatizar el tema de la adopción, a pesar de que yo sé que se apunta a eso. La cuestión de la adopción es seria y tiene que estar dotada de toda transparencia y de seriedad necesarias, siempre apuntando al interés del niño, como decía el señor senador por Corrientes.

Eso es lo que nosotros queremos, por eso proponemos esta redacción que fue leída por Secretaría.

En consecuencia, con estas manifestaciones respondo al señor senador por Corrientes y solicitaría que si no hay otro senador que quiera hacer uso de la palabra pasemos a votar, en virtud de que existe una gran cantidad de proyectos que deben ser considerados hoy, que es el último día del período ordinario de sesiones.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: he sido aludido y tengo que contestar.

No sé si estuvo en la intención del señor senador Branda, pero dijo "yo sé que se apunta a eso".

Yo no estoy pidiendo la privatización de la adopción, Dios me libre. Es el juez quien tiene que actuar, y en eso estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo en darle la discrecionalidad suficiente teniendo siempre en vista el bien del menor, de manera que mi intención no es la de privatizar.

Por lo tanto no le quede la menor duda al señor senador Branda de que a eso no ha apuntado la crítica que he realizado. Además, me parece muy bien y quede como interpretación auténtica, que la reglamentación que pueda proponerse o dictarse de ninguna manera podrá basarse en esos fundamentos que, repito, son absolutamente inaceptables.

Yo pediría al señor miembro informante que me explique cómo va a funcionar ese registro único, porque dado que en la redacción que se propone se aceptan los registros provinciales, quiero saber qué grado de dependencia o de independencia con respecto al registro único van a tener.

En consecuencia, un juez provincial que tenga que dictar una resolución, ¿tiene que pedir necesariamente la anuencia o la lista al registro único ubicado en la Capital Federal o podrá dar preferencia a los registros del lugar, y eventualmente podrá requerir los eventuales candidatos que se anoten en el registro de la Capital Federal?

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: le voy a contestar al señor senador por Corrientes a título ilustrativo, porque creo que se ha alargado mucho el tratamiento de este tema.

De ninguna manera se puede adelantar esto, porque cada provincia y la Nación van, de alguna forma, a dictar su propia reglamentación.

En el dictamen originario habíamos propuesto que la Nación iba a reglamentar esto y nosotros íbamos a poder participar. También existe en la comisión que preside el señor senador por Corrientes un proyecto de ley en el cual se trabaja sobre este tema del registro.

Propongo entonces, respecto de esta cuestión, dejar instaurado el artículo 5º. Pido, entonces, que si no hay más oradores pasemos a la votación.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: considero que, dada la importancia de este tema, hay que tomarse el tiempo necesario.

Nunca imaginé que la buena fe puesta al servicio del tratamiento de un proyecto podría interpretarse como que estoy auspiciando una privatización.

Muy pocas veces apoyé las privatizaciones económicas; menos voy a aprobar las privatizaciones humanas. Por lo tanto me parece un contrasentido lo que ha dicho el miembro informante de la Comisión de Legislación General.

Creo sinceramente, señor presidente, que esto constituye la base de esta ley de adopción. Debo reconocer que en el artículo 5º, que pasaría a ser el 2º de la ley, indudablemente se ha avanzado bastante. Evidentemente era totalmente distinto el artículo del dictamen.

A los efectos de la técnica legislativa, y a cualquier efecto de interpretación, esto no deja de representar una centralización. En efecto, a través de una ley nacional estamos obligando a las provincias a organizar en el orden nacional y provincial un Registro Único. La organización de un Registro Único es una cuestión de procedimiento que debería ser realizada por los estados provinciales.

Me pregunto lo siguiente con respecto a esta redacción. ¿Pueden adoptar las personas que no están inscriptas, por más que estén a favor del derecho y de los intereses superiores del menor? Pareciera que no. ¿Qué pasa en el ámbito rural cuando hay personas que eligen al padre adoptante? ¿Tampoco lo van a poder hacer? ¿Es un impedimento o un nuevo condicionamiento para la adopción el hecho de estar inscripto y en un Registro Único? Creo que esto viola el federalismo y se nos quita, como ya hemos visto, la posibilidad del control social por parte de los estados provinciales.

Nosotros no vamos a votar el artículo 5º con la redacción de la comisión y, en consecuencia, vamos a proponer el siguiente artículo 5º: A los fines de esta ley, las autoridades de aplicación podrán, en el orden nacional, organizar un registro de aspirantes a la adopción. Invítase a las provincias a crear un registro en cada una de ellas cuyo funcionamiento entre sí se coordinará mediante convenio.

Este es el texto del artículo 5º que propone el bloque de la Unión Cívica Radical. Asimismo solicito que la votación se haga en forma nominal.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — Señor presidente: vamos a mantener el dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Cafiero). — Se va a votar el artículo 2° del proyecto tal como fue leído por Secretaría.

Sr. Agúndez. — He pedido el voto nominal, señor presidente.

Sr. Branda. — No es aplicable, según el reglamento.

Sr. Agúndez. — Bueno: que la Presidencia diga que no es aplicable en este caso.

Sr. Presidente (Cafiero). — Según mi interpretación del reglamento, esta cuestión se decide por simple mayoría. No hace falta, no se requiere ni es viable la votación nominal.

Se va a votar el artículo 2° del proyecto tal como fue leído por Secretaría.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — Se han registrado 30 votos a favor y 14 en contra. Queda aprobado el artículo.

En consideración el capítulo VI, artículos 32 a 34.

—Se enuncia el artículo 32.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: siguiendo la metodología aprobada, corresponde poner en consideración el artículo 3° de la ley, artículo 32 de la disposición transitoria, pero se vota como artículo 3° de la ley.

Sr. Presidente (Cafiero). — Con la observación formulada por el señor senador por La Rioja, se va a votar el artículo 3° del proyecto.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — Aprobado por unanimidad.

—Se enuncia el artículo 33.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: este artículo, que en realidad es el 4°, quedaría redactado de la siguiente manera: "Deróganse la ley 19.134 y el artículo 4.050 del Código Civil".

La ley 19.134 es la vigente, que estamos dejando sin efecto, y el artículo 4.050 del Código Civil es el que prohíbe las adopciones y que, por supuesto, quedaría derogado por esta disposición.

Sr. Presidente (Cafiero). — El artículo 34 es el de forma.

Sr. Menem. — Sí, sería el artículo 5° del proyecto.

Quiero aclarar, señor presidente, que el artículo 33 del proyecto —4° en la ley— no debe hacer alusión a la ley 19.134 y sus modificatorias, porque hay modificaciones introducidas por la ley 23.264 y 23.515. Entonces no vaya a entenderse que estamos modificando disposiciones de la ley de patria potestad, de filiación y de matrimonio civil. Con que diga "Deróganse la ley 19.134 y el artículo 4.050 del Código Civil", es suficiente.

Sr. Presidente (Cafiero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 33 con las modificaciones propuestas por el señor senador por La Rioja y aceptadas por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — Queda aprobado por unanimidad.

—El artículo 34 es de forma.

Sr. Presidente (Cafiero). — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados. (*Aplausos*.)

Si no se hace uso de la palabra se van a votar los pedidos de inserciones.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafiero). — Se procederá en consecuencia¹.

2

MOCION DE RECONSIDERACION

Sr. Moreau. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor diputado..., perdón, senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Me quiere llevar con usted a la Cámara. (*Risas*.)

Sr. Presidente (Cafiero). — No a todos les pasa los mismo.

¹ Ver el apéndice.